



ARGUMENTOS

Año 1 N° 2. Julio, 2008

Publicación del Instituto de Estudios Peruanos

Coordinador

Romeo Grompone

Asistentes de dirección

Rodrigo Barrenechea
Carlos De Los Ríos

Editora

Mariel García

Diagramación

Rosy Castro

Consejo editorial

Carlos Iván Degregori
Rodrigo Barrenechea
Carlos De Los Ríos
Mariel García
Romeo Grompone
María Isabel Remy
Pablo Sandoval
Martín Tanaka
Francesca Uccelli
Víctor Vich

PRESENTACIÓN

A dos años de gestión de este gobierno, contrastan un discurso oficial que enfatiza los logros económicos obtenidos, que se promociona además en campañas mediáticas, y una oposición que se manifiesta más en el plano social que en el directamente político. Ella tiene, sobre todo, expresión regional y un conjunto de demandas diferenciadas. La movilización social, como se expresara en el paro del 9 de julio, consigue articularlas, si bien por ahora, solo de modo coyuntural.

En este número, discutimos estos problemas en la sección de política y sociedad; hacemos un balance de algunos logros en economía; y consideramos, desde los estudios culturales y la historia, los estilos de presentarse de Alan García. Reseñamos, además, publicaciones recientes y, siguiendo con el estudio de la situación política de los países latinoamericanos, estudiamos el caso de Uruguay, que probablemente es el país de la región más próximo al desarrollo de una propuesta socialdemócrata.

En este número...

POLÍTICA Y SOCIEDAD: Martín Tanaka, EL GOBIERNO AL EMPEZAR EL SEGUNDO TIEMPO, Pág. 2 / Eduardo Ballón E., A PROPÓSITO DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL, Pág. 6 / Adolfo Garcé, LOS PRINCIPALES ÉNFASIS DE LA AGENDA DEL GOBIERNO DE TABARÉ VÁZQUEZ, Pág. 12.

ECONOMÍA Y DESARROLLO: Elmer Cuba, ECONOMÍA PERUANA SIN CIFRAS MACROECONÓMICAS, Pág. 17.

HISTORIA Y CULTURA: Juan Carlos Ubillúz, EL GOBIERNO AL EMPEZAR EL SEGUNDO TIEMPO, Pág. 20 / José Luis Rénique, ALAN GARCÍA: PENSAMIENTO HAYA Y MODERNIZACIÓN, Pág. 25 / Ricardo Cuenca, LA EDUCACIÓN COMO PROYECTO POLÍTICO-CULTURAL, Pág. 29.

CRÍTICA Y RESEÑA: Jaris Mujica, PENSAR LA CORRUPCIÓN DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES, Reseña: Romper la mano. Una interpretación cultural de la corrupción, de Ludwig Huber, Pág. 32 / Javier Iguíñiz, Reseña: Clases sociales en el Perú. Visiones y trayectorias. Plaza, Orlando compilador, Pág. 34.

IEP Instituto de Estudios Peruanos

Horacio Urteaga 694 - Jesús María / Teléfonos: 431-6603 / 332-6194 / 424-4856 / 431-3167 / 331-3632 / 423-8948

Fax: 332-6173 E-mail: postmaster@iep.org.pe

EL GOBIERNO AL EMPEZAR EL SEGUNDO TIEMPO

Martín Tanaka*

Estamos a medio camino del segundo gobierno de Alan García (el último año no cuenta, en realidad, porque es electoral y la cercanía de este proceso no promueve, por lo general, que se tomen medidas de fondo). En este texto hago un breve balance de las estrategias de los actores políticos hasta el momento y especulo sobre las que considero desarrollarán en los próximos meses, de cara a las elecciones del 2010-2011. Un supuesto fundamental en mis especulaciones es que la conducta de los actores se entiende analizando sus intereses políticos inmediatos.

Los beneficios y los costos de la gestión de este gobierno

¿Cuál ha sido hasta el momento el rumbo del gobierno? Se ha escrito mucho al respecto. Para resumir, digamos que, desde la campaña electoral de 2006, García configuró un patrón que ha seguido sistemáticamente: exorcizar los fantasmas de su primer gobierno asumiendo un manejo ortodoxo en la economía, construir una coalición con los poderes de facto (empresarios, iglesia católica, militares), y presentarse como el mejor muro de contención ante la “amenaza” de fuerzas contrarias al sistema. En cuanto a estilos de manejo gubernamental, García se ha mostrado muy solo: entre 1985 y 1988 se decía que García gobernaba con sus amigos, no con el partido; hoy, tampoco gobierna con el partido, pero no cuenta con asesores de su confianza de reconocida influencia. Hemos visto un estilo de gestión signado por un relativo aislamiento, sin diálogo o consulta regular con actores significativos; el aislamiento parece haber tendido a reforzar en García cierta idea de no ser comprendido, de sentirse injustamente criticado, lo que, además, lo lleva a formular discursos intolerantes. En cuanto al manejo gubernamental, García ha buscado aparecer siempre como árbitro en última instancia de los conflictos intragubernamentales, e incluso ha parecido alentarlos para debilitar a sus



subalternos y erigirse como el único y gran referente partidario. En este aspecto, prosigue con el estilo de su primer gobierno, marcando en ambos casos su protagonismo. Este estilo de hacer las cosas ayuda a entender muchas cosas: por ejemplo, la improvisación, el efectismo, los deslices reiterados, las contradicciones al interior del gobierno, la falta de iniciativas de mediano y largo plazo, la dificultad para planificar, anticipar, desarrollar políticas públicas eficaces o implementar reformas complejas que requieren la coordinación de muchos actores.

Del otro, el crecimiento ha mostrado los límites de la administración pública y de la naturaleza del Estado, la magnitud de nuestro atraso y de nuestras tareas pendientes, y lo difícil que es superar tanto desigualdades como inercias estructurales.

Todo esto ha tenido beneficios y costos. De un lado, la economía sigue creciendo, por encima del promedio de la región. Del otro, el crecimiento ha mostrado los límites de la administración pública y de la naturaleza del Estado, la magnitud de nuestro atraso y de nuestras tareas pendientes, y lo difícil que es superar tanto

desigualdades como inercias estructurales. De allí, la sistemática caída en la aprobación al gobierno, pese a los “éxitos” macroeconómicos.

La probable continuidad de los actuales lineamientos

Sobre la base de este diagnóstico, ¿buscará el gobierno cambiar de camino? Parece difícil. Existe un extendido sentido común en los círculos gubernamentales que compara el desempeño del gobierno del presidente Toledo con el de García: si Toledo, tan aislado y con bajos porcentajes de popularidad, terminó su gestión con una aprobación del 33% (datos nacionales de APOYO), García llegará a una aprobación sustancialmente más alta, considerando que el crecimiento será mayor, habrá un mejor manejo político y una mejor acción partidaria, lo que permitiría pensar en un consecutivo gobierno aprista o, por lo menos, en una sustantiva presencia de esta organización política en el Congreso. ¿Cambiar de rumbo? ¿Para qué? Esto exigiría hacer concesiones, cambiar de estilo, aventurarse por aguas desconocidas. Además, las recientes cifras de reducción de la pobreza del INEI estimulan una lectura optimista. Tarde o temprano, la presión amainará, la cosa es mantenerse firmes, parece pensarse en los círculos del gobierno. El eventual aumento de gasto público no modificará la orientación de la política económica ni la forma en que se definirán y ejecutarán las políticas sociales.

El problema es pasar por los siguientes dos años asegurando la estabilidad, de modo que los recursos que se generan puedan traducirse en inversión y gasto, lo que a la larga reducirá la pobreza y creará mayor bienestar. ¿Dónde están las amenazas? ¿En la oposición política? García ha sido explícito en que ella no le preocupa. El gobierno ha logrado armar mayoría tranquilamente con el apoyo de un grupo importante de congresistas de UPP, la bancada fujimorista y Unidad Nacional, sin hacer mayores concesiones a ninguno de ellos. Por ejemplo, se ha especulado mucho sobre el costo que habría pagado el gobierno por el apoyo fujimorista, cuando en realidad la prueba de fuego que

demuestra que para el gobierno este apoyo no le ha demandado mayores modificaciones en su orientación, incluida la extradición y posterior enjuiciamiento al ex-presidente Fujimori, es un proceso judicial impecable.

Ahora bien, las cosas empezarán a cambiar un poco porque los actores deberán empezar a buscar una mejor ubicación pensando en las elecciones de 2010-2011. Cada sector evaluará cuán lejos o cuán cerca le convendrá ubicarse respecto del gobierno. La elección de la próxima mesa directiva del Congreso nos dará algunos indicios. Del lado de los sectores hasta ahora cercanos al gobierno, creo que pesará todavía bastante el criterio de no perder la posibilidad de obtener favores políticos, por más pequeños que sean.

Una oposición ubicada en el plano social

La oposición para el gobierno se ubica en el plano de lo social, donde operan los “perros del hortelano”; acá sí se perciben riesgos, justificadamente. No tanto por la vitalidad de los movimientos de protesta; acá también campea la fragmentación. El tema es que puede haber proliferación de protestas, con brotes de violencia, que le imponen al gobierno una miríada de soluciones ad-hoc muy desgastantes; pero, fundamentalmente, las protestas pueden evocar imágenes presentes en países vecinos, que pueden espantar a los inversionistas: “no hay nada más cobarde que un millón de dólares”. Por ello, para el gobierno, los enemigos son los “promotores” de las protestas: ellas son vistas como fruto de una manipulación de las izquierdas, de allí el discurso macartista del gobierno: comunistas reciclados como ecologistas, radicales fracasados, agitadores antisistema, humalistas.

Hasta el momento, hemos visto más retórica polarizadora e intolerante del gobierno que prácticas concretas de acoso a la oposición, mientras que, en el tratamiento de los conflictos, sigue primando una lógica negociadora, impuesta por Jorge Del Castillo, pese a que esto constituye una línea de fricción con un empresariado y medios de derecha que defienden una política de “línea dura” para desincentivar las

protestas. En la percepción gubernamental, un sector de los “perros del hortelano” serían los “caviares”, que controlarían parte importante de la prensa, generando problemas de comunicación, lo que explicaría la baja aprobación a la gestión, pese a sus innegables logros. De allí, también, la hostilidad en contra de estos, percibidos como poseedores de un peso político desmedido respecto de su pobre desempeño electoral.

La oposición para el gobierno se ubica en el plano de lo social, donde operan los “perros del hortelano”; acá sí se perciben riesgos, justificadamente. No tanto por la vitalidad de los movimientos de protesta; acá también campea la fragmentación. El tema es que puede haber proliferación de protestas, con brotes de violencia, que le imponen al gobierno una miríada de soluciones ad-hoc muy desgastantes [...]

Hasta el momento, la estrategia del gobierno ha sido meter la pierna fuerte contra los “perros del hortelano” (pero evitando tarjetas rojas), y en el futuro seguramente se harán más esfuerzos por atender el problema de la pobreza y de la exclusión, especialmente en ciudades intermedias de la sierra. Ya el gobierno ha diagnosticado la imposibilidad de atacar la pobreza más estructural, signada por el aislamiento y la dispersión si no se incentiva una mayor concentración urbana o, al menos, territorial, en una lógica que parece evocar las “reducciones de indios” del virrey Toledo. Estaría en planeación una estrategia que permitiría terminar el gobierno con un programa acelerado de inauguraciones de obras de todo tipo, focalizadas en núcleos urbanos intermedios en provincias, buscando atender a los deciles superiores de la pobreza, más integrados a circuitos modernos y con mayor cantidad de votantes potenciales.

¿Tendrá éxito esta estrategia? Puede ser, aunque también hay importantes riesgos. Muchos han señalado, con razón, que en 2011 podemos repetir el escenario de 2006, en tanto estaría demostrado que el crecimiento no produce más legitimidad política mientras beneficie solamente a unos cuantos y aumente la desigualdad, lo que generaría insatisfacción. Sin embargo, los últimos resultados del censo rebatirían esas evaluaciones; por ello, ha sido tan intenso el debate sobre su validez. Como sea, al gobierno no le costaría mucho, y podría obtener un gran beneficio, de profundizar un giro hacia lo social, ampliar la convocatoria, tomar en serio la reforma del Estado y alejarse del discurso macartista. ¿Cómo enfrentará el gobierno el escenario 2010-2011? Un indicio de ello será el rumbo que tomará el gobierno cuando salga el gabinete Del Castillo. Tal vez el APRA apueste a una alianza que vaya más allá del partido, lo que nos lleva a analizar cómo evaluarán las distintas fuerzas políticas el próximo escenario electoral.

La ubicación de los otros actores políticos

En general, todos los actores buscarán resaltar más las diferencias con el gobierno a partir de ahora, como ya se ha empezado a ver. Habrá quienes intentarán desmarcarse desde una posición de continuidad, como los fujimoristas, quienes intentarán reeditar la combinación de discurso antisistema y continuidad de un modelo conservador; además, la proximidad de las sentencias a su líder máximo los obligará a asumir posiciones más duras. De otro lado, Unidad Nacional deberá resolver el dilema de si se presentará como fuerza de oposición o no; si opta por lo primero, podría presentarse como una opción liberal socialcristiana consecuente, lejana de un gobierno sin espíritu reformista; si opta por lo segundo, encontrará un espacio donde tendrá que competir con muchos otros posibles candidatos (Kouri, Castañeda, Ántero Flores, por ejemplo). En general, tendremos una gran dispersión dentro del campo de la continuidad del modelo; pero, en ese campo, esto no se percibe como

problema en tanto en segunda vuelta el triunfo de un candidato sistémico estaría asegurado.

En cuanto a la oposición, ella debería preocuparse por asumir seriamente la tarea de gobernar; su discurso enfatiza el aumento en la tributación, la redistribución y el aumento del gasto social, banderas que no parecen tan seductoras en un país en el cual los problemas tienen más que ver con no saber administrar o gastar de manera eficiente recursos que existen, antes que con generar nuevos.

Del lado de la oposición, se percibe también mucha confianza, aunque por las razones contrarias. Se piensa que, sin García como candidato, esta vez será posible el triunfo en segunda vuelta de un candidato crítico con el modelo actual. También se cuenta con la fragmentación del voto y la posibilidad de entrar a segunda vuelta con menos votos de los que sacó Ollanta Humala en 2006. Este confía en su condición

de “favorito” para encabezar el voto antisistema; no hay rivales que hayan aparecido todavía. Fuerza Social aparece como un proyecto interesante, pero mientras no se defina quién encabezará ese frente, así como sus referentes y candidatos potenciales, sus posibilidades electorales son inciertas. Lo mismo ocurre con respecto a la Coordinadora Política Social. Detrás de ellos o creando otras nuevas opciones, se ubicarán los frentes de defensa y actores regionales, pero claramente en posiciones subordinadas, en tanto sus posibilidades de articulación propias son muy limitadas.

En cuanto a la oposición, ella debería preocuparse por asumir seriamente la tarea de gobernar; su discurso enfatiza el aumento en la tributación, la redistribución y el aumento del gasto social, banderas que no parecen tan seductoras en un país en el cual los problemas tienen más que ver con no saber administrar o gastar de manera eficiente recursos que existen, antes que con generar nuevos. En todo caso, la posibilidad de que en los próximos dos años la dinámica política cambie depende de la capacidad de la oposición para jaquear al gobierno. Si ello no ocurre, no creo que haya cambios mayores. ■

* Investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos.

A PROPÓSITO DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL: Las relaciones entre el gobierno y las regiones

Eduardo Ballón E.*

Las relaciones entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales han estado marcadas en los últimos meses por reiterados choques y desencuentros, que se suman a la conflictividad que se observa en muchas de ellas, como lo evidenciaron los sucesos de Moquegua. Las recurrentes críticas de las figuras más visibles del gobierno, en especial del Presidente, a la gestión de las autoridades subnacionales a lo largo del año pasado parecieron ceder en intensidad y adjetivos tras la reunión que tuvieron a inicios de éste Alan García y la Asamblea de Gobiernos Regionales. Sin embargo, las moderadas expectativas que suscitó este evento sobre las posibilidades de una relación de diálogo de cara a la urgente e indispensable agenda de la descentralización, se disiparon rápidamente y dieron lugar a una sucesión de pugnas. Las disputas generadas por el gobierno nacional a través de distintas normas que buscan “consagrar” el modelo económico han sido innumerables. Para que no queden dudas sobre de dónde vienen los tiros, el congresista oficialista José Vargas presentó un proyecto legislativo para permitir la “intervención” de los gobiernos regionales.

Un gobierno sin norte claro en la descentralización

Del discurso pronunciado por Alan García en julio de 2006, en el que anunciaba que quería “cogobernar con los 1.800 alcaldes y los presidentes regionales”, no queda mucho. El “*shock* de inversiones” que se materializó en la Ley 28880, y que autorizó un crédito suplementario de 1.937 millones en el presupuesto de ese año, 87% de los cuales debían ser ejecutados por el gobierno central, naufragó por la incapacidad estatal



que solo pudo girar —ni siquiera gastar— el 25% de tales recursos.

Del posterior “*shock* descentralista” de octubre de ese año, que establecía veinte medidas para adelantar en la descentralización, apenas se han cumplido seis y siguen pendientes cuestiones centrales como la transferencia de las 185 competencias comprometidas para diciembre de 2007 y la descentralización fiscal, en la que no se ha avanzado nada sustantivo.

Del posterior “*shock* descentralista” de octubre de ese año, que establecía veinte medidas para adelantar en la descentralización, apenas se han cumplido seis y siguen pendientes cuestiones centrales como la transferencia de las 185 competencias comprometidas para diciembre de 2007 y la descentralización fiscal, en la que no se ha avanzado nada sustantivo. De los

pilotos de municipalización de la educación no queda mucho más que los conflictos puntuales que surgieron entre los distintos alcaldes en sus localidades y el sindicato magisterial que rechazó la medida. Por si fuera poco, se siguen omitiendo temas neurálgicos para el proceso, entre los que destacan la necesidad de su conducción concertada —hoy día en manos del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Descentralización de la PCM—, la implementación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, la indispensable reforma del Estado, la redefinición de los roles de los distintos niveles de gobierno y la consolidación de la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. En otras palabras, a lo largo de este tiempo, el gobierno aprista demostró su falta de voluntad política, de propuestas claras y de capacidad de gestión en esta como en otras materias.

La Asamblea de Gobiernos Regionales: un actor emergente sin la fuerza suficiente

Los resultados electorales de noviembre de 2006 generaron un escenario particularmente difícil para el gobierno en lo que concierne a la descentralización. La victoria de agrupaciones regionales en diecinueve regiones (65%) y la derrota aprista (que pasó de gobernar doce regiones y 34 provincias a hacerlo en apenas dos y quince respectivamente) obligaban a un manejo sistemático y cuidadoso de la descentralización y de las relaciones con las autoridades subnacionales. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario y desde un primer momento se sucedieron las declaraciones del Presidente de la República y de distintos funcionarios sobre la incapacidad de gasto de los gobiernos regionales y las limitaciones de sus burocracias, además de distintos intentos de afectar parte de los recursos del canon para entregarlos directamente a las familias de las zonas beneficiadas, lo que evidenciaba una estrategia orientada a «congelar» la descentralización aprovechando un escenario marcado por la fragmentación social y política, la falta de oposición consistente y la debilidad aprista en el interior del país.

La desactivación del CND alentó la constitución de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Integrada por todos los presidentes de región, esta aspira a convertirse en el principal interlocutor político del gobierno en el proceso. Con un núcleo más activo, en el que sobresalen cinco o seis de ellos (Simon, su actual presidente por unos días más, Huaroc, Coronel, Villanueva y Guillén), aunque no ha resuelto el tema de su institucionalidad, ha avanzado en la producción de distintos instrumentos y propuestas —destacan las referidas a legislación fiscal y agenda legislativa, así como las vinculadas a electrificación rural, programas y presupuesto complementario en los sectores salud y educación y su posicionamiento frente al Sistema Nacional de Inversión Pública— y ha logrado reunirse ya en dos ocasiones con el gobierno nacional, que no puede disimular su incomodidad por el intento de articulación de los gobiernos regionales y prefiere “negociar” bilateralmente con ellos, como lo ha hecho en los casos de Piura, San Martín, Cusco y Arequipa.

La desactivación del CND alentó la constitución de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Integrada por todos los presidentes de región, aspira a convertirse en el principal interlocutor político del gobierno en el proceso. Con un núcleo más activo, en el que sobresalen cinco o seis de ellos (Simon, su actual presidente por unos días más, Huaroc, Coronel, Villanueva y Guillén), aunque no ha resuelto el tema de su institucionalidad [...]

Es claro que entre los integrantes de la Asamblea existen orientaciones y tonos marcadamente diferenciados. En un extremo, están los presidentes apristas de Piura y La Libertad, acompañados por Kouri y Salas, guardando silencio ante los conflictos

entre el gobierno nacional y el interior del país; en el otro, se ubica Hernán Fuentes, convencido de que la radicalidad de su discurso y sus gestos le permitirá sobrevivir como autoridad regional a pesar de su incompetencia en la región más fragmentada. Entre ambos polos, se ubica el presidente de la Asamblea tratando de afirmar un liderazgo que pretende ser nacional y busca conducir la respuesta del gobierno central. En otras palabras, aunque avanza en una agenda compartida, lo que sin duda es importante y le da cierta capacidad de presión, la Asamblea está lejos de consolidarse como un espacio sólido. La heterogeneidad de su composición, pero también la competencia por su liderazgo conspiran contra ese objetivo. La deplorable respuesta de los presidentes de Cajamarca y Junín cuando el gobierno “castigó” a Cusco suspendiéndolo como una de las sedes de APEC se inscribe en esta perspectiva.¹

Más profundamente, los intereses particulares de las distintas regiones, en especial aquellos ligados a los recursos del canon, enfrentan a unas autoridades con otras. El gobierno regional del Cusco está en conflicto con los de Ayacucho y Huancavelica por el gas de Camisea; el de Puno amenaza a Tacna y Moquegua con el control del agua, y el presidente de Cajamarca se afirma en la defensa irrestricta de los fondos resultantes de la explotación minera en su departamento. Sin capacidad para avanzar en una posición política compartida frente al gobierno nacional —exigir, por ejemplo, que la presión tributaria llegue al 18% establecido en el Acuerdo Nacional o presionar para que el MEF haga transparente el uso del 50% de los recursos fiscales que pagan las empresas mineras y petroleras que no se entregan como canon—, sus limitaciones y silencios resultan evidentes.

La conflictividad con las regiones

La conflictividad entre el gobierno nacional y las regiones se multiplicó en los últimos tres meses.

Los enfrentamientos, que tienen en la base distintas razones estructurales —las brechas entre Lima y el interior que, lejos de acortarse, se ahondan; la incapacidad del Estado para responder las demandas provincianas; la reconcentración de importantes decisiones y una política económica excluyente asumida como dogma por un gobierno que ofreció el cambio responsable—, van más allá de una disputa por competencias con las autoridades subnacionales y se expresan también en las encuestas de opinión. Ipsos Apoyo Opinión y Mercado, en su última encuesta, registra la caída de la aprobación de la gestión presidencial a 30% nacionalmente, la cual llega apenas a 7% en el Sur, 11% en el Oriente, 30% en el centro y 26% en el norte, mientras que en Lima alcanza el 39%.

Los enfrentamientos, que tienen en la base distintas razones estructurales — las brechas entre Lima y el interior que, lejos de acortarse, se ahondan; la incapacidad del Estado para responder las demandas provincianas; la reconcentración de importantes decisiones y una política económica excluyente asumida como dogma por un gobierno que ofreció el cambio responsable—, van más allá de una disputa por competencias con las autoridades subnacionales y se expresan también en las encuestas de opinión.

En los últimos meses, distintas decisiones gubernamentales originaron la protesta de las autoridades subregionales y, en muchos casos, importantes movilizaciones y paralizaciones que no están necesariamente vinculadas a ellas y que son parte de las presiones con las que tienen que lidiar cotidianamente. Por su duración, la más visible fue la relacionada a la contratación de nuevos profesores en

las regiones. El ministro de Educación generó el conflicto al publicar el DS 004-2008-ED que limitaba la contratación a aquellos maestros que hubieran culminado sus estudios en el tercio superior bajo el supuesto de que por esa vía se mejoraría la calidad del sistema. La medida, que debía ser aplicada por las autoridades regionales, fue rechazada y en varios casos se aprobaron ordenanzas en sentido contrario, lo cual descalificaba directamente al propio Ministerio.

Como lo señaló la Defensoría del Pueblo, se trataba de una medida inconstitucional y discriminatoria de dos terceras partes del magisterio. Su improvisación era evidente no solo

por no existir un sistema de control de calidad de las universidades y los institutos pedagógicos sino también porque rompía los criterios tanto de la Ley General de Educación como los de la propia Ley del Profesorado de este gobierno. Tras varios días, el conflicto fue resuelto el 19 de febrero con el acuerdo entre el Premier y veinte titulares regionales opuestos al decreto, quienes establecieron un examen único para los profesores postulantes y procedieron al nombramiento de aquellos que lograran una calificación de 14 o más hasta completar el total de las vacantes, pudiendo participar en el proceso de contratación los maestros que obtuvieran nota aprobatoria. El gobierno se vio obligado a retroceder y a reconocer que los gobiernos regionales están también interesados en mejorar la calidad de la educación.

En el caso de la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, promovida por el propio García, se trata de cambiar la posibilidad de concesionar tierras forestales sin cubierta boscosa y de dominio del Estado por la de venderlas a personas y empresas nacionales y extranjeras, en nombre de la generación de empleo. La intención presidencial fue rechazada por varios sectores. Los presidentes regionales de San Martín, Amazonas, Madre de Dios, Loreto y Ucayali, tras dialogar con el Premier, lograron el compromiso de que la norma garantizaría la intangibilidad de las tierras de comunidades nativas

y campesinas y les otorgaría a los gobiernos regionales la potestad de optar entre la venta y la concesión. Las organizaciones sociales de esas y otras regiones exigieron la anulación de la iniciativa por medio de la realización de un paro que afectó diversas zonas del país y que tuvo pasajes de mucha violencia en Pichanaki, donde seis campesinos fueron heridos en el enfrentamiento con la policía. Ahora, el Congreso tendrá que resolver el futuro de la propuesta.

En el caso de la norma referida al patrimonio cultural, luego de las críticas y la protesta de distintos presidentes regionales, las organizaciones sociales cusqueñas, agrupadas en la Asamblea Regional, protagonizaron un paro de 48 horas. La modificación de la norma, que garantiza la decisión de los gobiernos regionales en el permiso para la construcción de hoteles y restaurantes en zonas adyacentes al patrimonio cultural, no logró calmar las agitadas aguas cusqueñas que, con su intransigencia, evidenciaron, además de los problemas de la actividad turística en esa región, su desconfianza en sus propias autoridades. Su aislamiento posterior no supone la solución del problema.

Finalmente, la publicación del decreto legislativo 1015, que afecta el derecho de propiedad de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, sorprendió porque, semanas antes de su promulgación, un texto idéntico, presentado como proyecto de ley 1992 al Congreso, fue rechazado por una Comisión y estaba a punto de correr idéntica suerte en otra. Su aprobación por el Ejecutivo, en el marco de las facultades delegadas por el Parlamento Nacional para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, tiene rasgos de saña y alevosía.

Los sucesos de Moquegua

En este escenario, los sucesos de Moquegua, que terminaron con la toma del puente Montalvo y la captura de un general de la policía, muestran otra dimensión de la complejidad de la conflictividad regional. El enfrentamiento evidenció las dificultades y

el desinterés relativo del gobierno para atender la creciente protesta social que se observa. El conflicto, que era previsible, creció hasta adquirir gran magnitud ante la indolencia estatal. En su base, se encontraba una norma vigente desde hace varios años que establece el monto a distribuir por concepto de canon minero a partir del material removido y no del mineral producido. Este criterio, a todas luces erróneo, fue aceptado por todas las partes hasta que los moqueguanos percibieron que les estaban “quitando” 300 millones, porque Cuajone entrega más cobre pero Toquepala (Tacna) mueve más tierra... llevándose mayores recursos.

La disputa, en un contexto en el que las demandas redistributivas están a flor de piel en las regiones del país, estaba cantada. El Ministerio de Energía y Minas, pero también el Ministerio de Economía y Finanzas pudieron advertirla desde meses atrás. Los congresistas de la región, una de ellas aprista, se agotaron en sus gestiones para atenderlo; la unidad de prevención de conflictos de la PCM no lo advirtió y la inteligencia del Ministerio del Interior tampoco. Negociada la solución tras varios hechos violentos, el Presidente calificó de delinquentes a los mismos con los que dialogó su gobierno, prolongando indefinidamente la conflictividad por la amenaza de su judicialización.

[...] los sucesos de Moquegua, que terminaron con la toma del puente Montalvo y la captura de un general de la policía, muestran otra dimensión de la complejidad de la conflictividad regional. El enfrentamiento evidenció las dificultades y el desinterés relativo del gobierno para atender la creciente protesta social que se observa. El conflicto, que era previsible, creció hasta adquirir gran magnitud ante la indolencia estatal.

Más allá de la articulación lograda en la acción colectiva, los sucesos mostraron la fragmentación social y las tensiones que existen en todas las regiones. La protesta fue inicialmente convocada por el Frente de Defensa, organización intermitente liderada por un ex funcionario de la anterior gestión regional, que logró sumar el descontento de distintos sectores sociales con una gestión regional que no logra traducir los “beneficios” del canon, que generan grandes expectativas, en mejoras en la calidad de vida de la población. Las autoridades, que responden a distintas agrupaciones regionales y provinciales constituidas para las elecciones de 2006, optaron por viajar a a Lima para presionar por la solución al problema, lo cual dio la impresión de que encabezaban un movimiento que no lideraban. El Frente, a su vez, se vio superado por una masa movilizadada que desbordó sus expectativas y su limitada capacidad de conducción. La negociación, ante la falta de interlocutores calificados, es decir, de dirección real del movimiento, no fue satisfactoria para los intereses que la motivaron, al extremo que el congresista Zevallos no suscribió el acta final y expresó públicamente sus reservas.

Los posibles costos finales del hecho no han sido cabalmente analizados. Es claro, sin embargo, que las autoridades regionales y la mayoría de alcaldes provinciales terminan con su legitimidad aun más debilitada. El Frente de Defensa sale sin una conducción clara y con potenciales disputas por los resultados de la negociación. La inestabilidad política de la región se acrecentará, como lo hará el sentimiento localista de “propiedad” de recursos naturales y de los “derechos” generados por estos, lo que alentará nuevos conflictos. Tacna, que se verá afectada con la modificación normativa, ya anunció su movilización en defensa de “sus” derechos, mientras el presidente de Puno advierte que exigirán compensación por el uso de “su” agua...

Un patrón constante

La conflictividad reseñada muestra un mismo patrón: un gobierno que adopta medidas polémicas sin

consulta alguna; autoridades regionales que critican y se oponen a muchas de ellas y buscan, sin éxito las más de las veces, canales de diálogo para resolver las diferencias, tratando de responder simultáneamente a su precario orden interno; organizaciones sociales fragmentadas y dispersas que se articulan en la protesta; el gobierno nacional que descalifica a las autoridades y movimientos del interior del país sin entender sus argumentos; protestas que se radicalizan muchas veces y que terminan en enfrentamientos violentos; finalmente, negociaciones parciales que postergan la causa de los conflictos y crean condiciones para otros nuevos.

Si esta tendencia se acentúa, el gobierno les dará la razón a quienes están convencidos de que quiere acabar con la descentralización, porque antes que en transferir competencias y funciones, recursos y capacidades, parece interesado en descentralizar problemas y conflictos.

Más allá de la improvisación de muchas de las medidas gubernamentales y de la creciente incapacidad de gestión que muestran los distintos sectores, da la impresión de que lo que se pretende es «descentralizar» la conflictividad de las relaciones con distintos actores sociales. Si esta tendencia se acentúa, el gobierno les dará la razón a quienes están convencidos de que quiere acabar con la descentralización, porque antes que en transferir

competencias y funciones, recursos y capacidades, parece interesado en descentralizar problemas y conflictos. Su intolerancia revela un afán de enfrentamiento e imposición con los gobiernos subnacionales, a los que se llega a amenazar con la intervención.

Desde el lado de las regiones, cabe preguntarse por el futuro de la Asamblea de Gobiernos Regionales y por su posibilidad de cumplir un rol político nacional. Es claro que este espacio ha dado algunos pasos importantes que, sin embargo, no logran disimular su heterogénea composición y sus debilidades. La disposición al diálogo y a la propuesta, a la búsqueda de canales de negociación y resolución de los conflictos que muestran algunos de sus voceros más calificados contrasta enormemente con la intransigencia y la irresponsabilidad de algunas autoridades regionales —curiosamente las que obtuvieron menor votación—, que parecen convencidas de que existe una relación directa entre enfrentamiento y obtención de créditos políticos. Mientras este espacio no avance en fortalecer su institucionalidad y se cohesione alrededor de una agenda de mediano y largo plazo, se verá debilitado ante la opinión pública y en su capacidad de interlocución con el gobierno nacional, lo cual limitará su posibilidad de intervenir con éxito en la marcha de la descentralización y en la definición de las políticas que el país requiere. ■■

* Investigador principal de DESCO.

1. Ambos Presidentes Regionales se apuraron a solicitar públicamente (28 de febrero del 2008) la organización de la reunión de APEC que fuera suspendida en Cusco, lo cual descalificaba, en la práctica, la movilización de dicha región.

LOS PRINCIPALES ÉNFASIS DE LA AGENDA DEL GOBIERNO DE TABARÉ VÁZQUEZ

Adolfo Garcé*

Tabaré Vázquez fue electo presidente de la República Oriental del Uruguay en la primera vuelta de las elecciones nacionales de octubre de 2004. Así, luego de más de tres décadas de espera, la izquierda uruguaya llegó finalmente al gobierno. El propósito de esta nota es ofrecer una descripción de los principales énfasis del presidente Vázquez. Como se verá, el Frente Amplio está llevando adelante una extensa agenda que puede ser definida como de centro-izquierda.

Una agenda socialdemócrata

En Uruguay, durante años, se debatió intensamente acerca de qué podía esperarse de un gobierno del Frente Amplio. Algunos, tomando nota de la formación marxista de la gran mayoría de los dirigentes frenteamplistas (incluido el propio Vázquez, que pertenece desde hace décadas a uno de los partidos marxistas uruguayos, el Partido Socialista), temían la puesta en práctica del menú de políticas públicas tradicional en los partidos de la vieja izquierda latinoamericana (estatizaciones, nacionalizaciones, intervenciones en los mercados, expansión desmedida del gasto público, confrontación con el FMI, etc.). El gobierno no siguió este camino. El anuncio realizado por Tabaré Vázquez en julio de 2004 (en el inicio de la recta final hacia la elección de octubre) de su firme intención de designar a Danilo Astori como Ministro de Economía en caso de ser electo, fue la primera señal de cuál sería el tono de la política económica del gobierno frenteamplista. Las medidas adoptadas durante estos tres años y medio confirmaron esta hipótesis.



El gobierno de Vázquez procura combinar crecimiento económico y distribución del ingreso. Es un gobierno de tono socialdemócrata, de centro-izquierda. La “partitura” del gobierno de Vázquez se parece mucho más a la de Lagos o Lula que a la de Chávez o Correa.

El gobierno de Vázquez procura combinar crecimiento económico y distribución del ingreso. Es un gobierno de tono socialdemócrata, de centro-izquierda. La “partitura” del gobierno de Vázquez se parece mucho más a la de Lagos o Lula que a la de Chávez o Correa.

La plataforma electoral y la agenda del gobierno

Nadie que haya seguido de cerca el debate interno ideológico del Frente Amplio durante las últimas dos décadas puede sorprenderse por el tono moderado que caracteriza a la agenda de Vázquez. Es que la izquierda uruguaya llegó al gobierno después de haber experimentado una profunda transformación

ideológica, que se fue reflejando en las sucesivas modificaciones introducidas en los programas de gobierno. Durante sus primeros años, el Frente Amplio tenía una plataforma electoral tributaria del pensamiento dependendista y socialista de la época y se definía como una fuerza política “antioligárquica y antiimperialista”. Después de la dictadura, se instaló un intenso debate acerca de cómo adaptar el programa frenteamplista a los tiempos nuevos. Esta vocación revisionista se aceleró durante los primeros años de la década del 90 por el efecto combinado de la crisis del sistema socialista, la experiencia de gobierno municipal en Montevideo y el ascenso del liderazgo de Tabaré Vázquez. Sin prisa pero sin pausa, a partir de 1990, el Frente Amplio fue abandonando la mayoría de las propuestas de matriz dependendista que figuraban en los documentos programáticos fundacionales. El viraje desde la izquierda hacia el centro demostró ser exitoso en términos electorales: en 1994, el Frente Amplio se ubicó tercero, pero muy cerca de los viejos partidos tradicionales (32% para el Partido Colorado, 31% para el Partido Nacional, 30% para el Frente Amplio). En 1999, se convirtió en el partido más votado (40%), pero perdió el balotaje. En el 2004, se impuso en la primera vuelta (51%).

El Frente Amplio llegó a la última elección con una plataforma electoral estructurada en cinco ejes. Tabaré Vázquez le propuso al electorado un gobierno para avanzar hacia el “Uruguay social” (énfasis en el combate a la exclusión), “Uruguay democrático” (abrir canales a la participación popular en la gestión de instituciones y políticas públicas, investigar el destino de los desaparecidos durante la dictadura), “Uruguay inteligente” (políticas de promoción de la innovación, la ciencia y la tecnología), “Uruguay productivo” (una nueva política económica) y “Uruguay integrado a la región y el mundo” (la integración al MERCOSUR como plataforma hacia otros mercados). De hecho, estas cinco líneas de trabajo han constituido la columna vertebral de las políticas del gobierno.

Tabaré Vázquez le propuso al electorado un gobierno para avanzar hacia el “Uruguay social” (énfasis en el combate a la exclusión), “Uruguay democrático” (abrir canales a la participación popular en la gestión de instituciones y políticas públicas, investigar el destino de los desaparecidos durante la dictadura), “Uruguay inteligente” (políticas de promoción de la innovación, la ciencia y la tecnología), “Uruguay productivo” (una nueva política económica) y “Uruguay integrado a la región y el mundo” (la integración al MERCOSUR como plataforma hacia otros mercados).

Uruguay social

En sintonía con su tradición ideológica más profunda, el gobierno del Frente Amplio ha hecho un enorme esfuerzo por combatir la pobreza y la exclusión. Se ha implementado una amplia batería de políticas orientadas en esta dirección. La primera señal de esta preocupación fue enviada de inmediato: durante su primer día como presidente, Vázquez anunció la creación del Ministerio de Desarrollo Social y la puesta en práctica de un Plan de Emergencia. Además, el gobierno aprobó una profunda reforma del sistema de salud con el objetivo expreso de mejorar la equidad del sistema tanto en términos de su financiamiento como de la calidad de los servicios (Sistema Nacional Integrado de Salud). Pensando en mejorar la distribución de la riqueza, el Ministerio de Economía diseñó y viene implementando una profunda reestructura de la política tributaria (se creó el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas). El gobierno pretende, según ha dicho, “que pague más el que tiene más, y menos el que tiene menos”. El énfasis

en la igualdad social es ampliamente perceptible en múltiples medidas del gobierno. Sin embargo, los niveles de pobreza e indigencia han disminuido menos de lo esperado. Y la distribución del ingreso tampoco ha mejorado. Se asiste, eso sí, a una notable disminución del desempleo que ronda la cifra, espectacular para el país, del 7%.

Uruguay democrático

Dentro de este capítulo, se destacan dos realizaciones. En primer lugar, el Frente Amplio reinstaló los Consejos de Salarios. Se trata del ámbito tripartito de negociación en el que, durante décadas (a partir de 1943), empresarios, sindicatos y gobierno concertaron los niveles salariales. Este mecanismo fue reinstalado después de la dictadura durante el primer gobierno de Julio M. Sanguinetti (1985-1989). Pero dejó de ser convocado durante la presidencia de Luis A. Lacalle (1990-1994). Ni Sanguinetti durante su segundo mandato (1995-1999) ni Jorge Batlle (2000-2004) los habían vuelto a instalar pese al reclamo sistemático de las organizaciones sindicales. En segundo lugar, el propio Tabaré Vázquez ha liderado los contactos con militares procurando esclarecer el destino de los desaparecidos durante la dictadura. En el marco de esta política, por primera vez desde la recuperación de la democracia, se han realizado excavaciones en predios militares en los que había indicios firmes de enterramientos clandestinos. Las dos políticas que acaban de sintetizarse tuvieron resultados distintos. Los Consejos de Salarios han sido una experiencia exitosa. Los trabajadores han visto incrementados sensiblemente los niveles salariales y la conflictividad sindical disminuyó respecto de gobiernos anteriores. La búsqueda de desaparecidos permitió localizar los restos de algunos presos políticos, pero, en términos generales, el gobierno no ha podido romper la conspiración de silencio de los involucrados en la represión. De todos modos, el gobierno logró procesar a un conjunto de jerarcas de la dictadura, entre ellos, al presidente que disolvió las cámaras el 27 de junio de 1973, Juan M. Bordaberry.

Uruguay inteligente

El gobierno frenteamplista ha logrado dar algunos pasos importantes en materia de promoción de la innovación, la ciencia y la tecnología. En primer lugar, durante el año 2005, Tabaré Vázquez instaló el Gabinete Ministerial de la Innovación (GMI), integrado por los ministros más directamente relacionados con el tema. En segundo lugar, se creó la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Esta reforma pretende contribuir a resolver dos problemas centrales del sistema de innovación del país. Por un lado, apunta a incrementar los grados de coordinación entre las instituciones vinculadas a la temática. Por el otro, apunta a elaborar políticas que permitan fortalecer en términos cualitativos y cuantitativos la investigación científica en el país, e incrementar la interfase entre la investigación científica y los procesos productivos. Desde la ANII, se viene impulsando un amplio conjunto de políticas. Por ejemplo, se avanza rápidamente hacia la creación de un sistema nacional de investigadores y hacia la puesta en marcha de un sistema nacional de becas. El GMI está elaborando, asimismo, un Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es innegable que, en términos históricos, los avances no son desdeñables. Sin embargo, no han faltado las diferencias de criterio entre el gobierno y la comunidad de expertos en innovación que ha reclamado intensificar el ritmo reformista y cuestionado algunas decisiones concretas. El diseño institucional del sistema nacional de investigadores, por ejemplo, ha sido un punto de conflicto entre el gobierno y la Universidad de la República.

Uruguay productivo

Los datos del PBI muestran que el país atraviesa una fase particularmente intensa de crecimiento económico. El PBI *per cápita* viene aumentando a tasas “chilenas” desde la finalización de la crisis 1999-2002 (aproximadamente 7% anual). Desde este punto de vista, es innegable que el gobierno frenteamplista ha logrado avanzar hacia la meta del “Uruguay

productivo”. Sin embargo, es evidente que lo ha hecho sin establecer una ruptura nítida con el paradigma de política económica aplicado por los gobiernos anteriores. El equipo económico del Ministerio de Economía es uno de los más profesionales que recuerda la historia política del país. Los principales jerarcas tienen un gran prestigio profesional y una sofisticada formación académica. Sin embargo, sus políticas son cuestionadas por una parte importante (me atrevería a decir que mayoritaria) del partido de gobierno. Es cierto que no hay una clara vocación privatizadora, como en los gobiernos anteriores. También es cierto que el Ministerio de Economía se las ha ingeniado para hacer posible un importantísimo aumento de los recursos públicos destinados a financiar la educación (el gobierno intenta cumplir con su promesa electoral de llevar 4,5% del PBI al presupuesto educativo) y la salud públicas (para financiar el SNIS). Sin embargo, muchos frenteamplistas criticaron severamente la refinanciación de la deuda externa con el FMI y extrañan la ausencia de las tan anheladas políticas sectoriales de promoción de sectores productivos. El equipo económico se niega, como los de los gobiernos anteriores, a “elegir ganadores”. Sin embargo, la creencia en la posibilidad de establecer mecanismos sectoriales de promoción constituye uno de los rasgos más característicos del pensamiento económico prevaleciente en la izquierda.

Los datos del PBI muestran que el país atraviesa una fase particularmente intensa de crecimiento económico. El PBI per cápita viene aumentando a tasas “chilenas” desde la finalización de la crisis 1999-2002 (aproximadamente 7% anual).

Uruguay integrado a la región y al mundo

La política de relaciones internacionales ha constituido, probablemente, una de las dimensiones

más polémicas e imprevisibles del gobierno de Vázquez. En términos generales, podría decirse que se ha caracterizado por su ambigüedad. El gobierno reestableció relaciones con Cuba y propició un fuerte acercamiento al gobierno de Chávez, que se manifestó, incluso, en la promoción del ingreso de Venezuela al MERCOSUR. Sin embargo, al mismo tiempo, estrechó inesperadamente la relación diplomática con el gobierno de los EEUU. En ese contexto, en marzo de 2006, Tabaré Vázquez recibió con visible satisfacción la visita del presidente norteamericano George W. Bush.

La política comercial ha sido igualmente polémica. Tradicionalmente, la izquierda uruguaya ha desconfiado de las virtudes de la mano visible del comercio internacional. Heredera del pensamiento cepalino, ha preferido abrir la economía doméstica gradualmente, apoyándose en acuerdos comerciales regionales, para cumplir con el objetivo de preservar y modernizar la industria nacional. Sin embargo, el gobierno de Vázquez, sorprendiendo a propios y extraños, hizo un gran esfuerzo por concretar la firma de un TLC con los EEUU. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Economía con el apoyo de Tabaré Vázquez, finalmente fue bloqueada por una coalición de sectores políticos frenteamplistas (liderada, a su vez, por Reinaldo Gargano, presidente del Partido Socialista y canciller hasta marzo de 2008) y organizaciones sociales.

El escenario electoral 2009

El año que viene se realizarán nuevamente elecciones nacionales. Las encuestas disponibles muestran que el Frente Amplio sigue siendo el partido preferido por los uruguayos, pero no permiten arriesgar pronósticos tajantes. Existe cierto consenso entre los analistas en cuanto a que el margen de incertidumbre respecto del desenlace del pleito es mayor que hace cinco años. En ese entonces, pocos dudaban del fuerte favoritismo del FA. En todo caso, el debate se centraba más en torno a si el FA ganaría en primera o en segunda vuelta.

Ahora, la mayoría de los analistas se muestran más cautelosos.

El año que viene se realizarán nuevamente elecciones nacionales. Las encuestas disponibles muestran que el Frente Amplio sigue siendo el partido preferido por los uruguayos, pero no permiten arriesgar pronósticos tajantes.

Desde mi punto de vista, el Frente Amplio es, otra vez, el claro favorito. Es probable que, a diferencia de la elección del 2004, requiera la instancia del balotaje para retener el gobierno. Pero, en primera o segunda vuelta, tiene grandes probabilidades de ser reelecto. El somero repaso de sus principales políticas muestra que está logrando cumplir con una parte importante de sus promesas electorales. Ha hecho un enorme esfuerzo por combatir la pobreza. Al mismo tiempo, logró sostener un ritmo de crecimiento económico inédito en el país. Mientras tanto, los partidos de oposición no han hecho lo suficiente para construir una agenda alternativa a la del Frente Amplio.

Si esta interpretación es correcta, la principal clave de la próxima elección es la candidatura del Frente Amplio. En Uruguay, no existe la regla de la reelección inmediata. El presidente saliente debe dejar pasar un período de gobierno. Esto obliga al Frente Amplio a encontrar otro candidato. Tabaré Vázquez ha anunciado públicamente su apoyo a Danilo Astori. Sin embargo, la propuesta no despierta entusiasmo en la mayoría de los grupos frenteamplistas. Todos reconocen la capacidad técnica del Ministro de Economía y los éxitos de su gestión. Asimismo, comprenden que tanto por su formación académica como por la moderación de sus preferencias, Astori es un excelente candidato para volver a seducir a los

siempre esquivos electores de centro. Sin embargo, se resisten a apoyar esta candidatura porque aspiran a que el próximo gobierno del FA profundice los cambios iniciados por Tabaré Vázquez. Para ellos, ganar el gobierno no es un fin en sí mismo. Quieren ganar para dejar una huella inequívocamente de izquierda en las políticas públicas. Quieren que el próximo gobierno asuma la deuda con la idea del “Uruguay productivo” e implemente políticas sectoriales. No quieren volver a vivir la amenaza de un TLC con los EEUU propiciado por un gobierno de izquierda.

El dirigente que tiene mayores probabilidades de encabezar esta corriente de opinión es José Mujica, ex guerrillero, dirigente del Movimiento de Liberación Nacional–Tupamaros, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre marzo de 2005 y marzo de 2008. Mujica es uno de los dirigentes políticos más populares del país. Desde mi punto de vista, es muy probable que termine siendo el candidato del Frente Amplio y, por ende, el sucesor de Tabaré Vázquez en la presidencia del país.

El candidato del Frente Amplio puede ser designado por el Congreso Extraordinario que se realizará en diciembre de este año. Si ninguno de los nombres propuestos alcanza dos tercios de los votos de los delegados al Congreso, la candidatura frenteamplista surgirá de las elecciones primarias abiertas que, desde la reforma constitucional de 1997, deben realizar de modo simultáneo los partidos políticos algunos meses antes de la elección nacional. Todo indica que no habrá acuerdo en el Congreso, y que Danilo Astori y José Mujica deberán competir por el apoyo de los electores frenteamplistas durante el primer semestre del año 2009. ■■

* agarce@fcs.edu.uy. Instituto de Ciencia Política Facultad de Ciencias Sociales Universidad de la República Montevideo – Uruguay.

ECONOMÍA PERUANA SIN CIFRAS MACROECONÓMICAS

Elmer Cuba*

A principio de los 90, la economía peruana sufrió cambios estructurales que alteraron el modo de asignación de recursos vigente hasta antes de las reformas. En un régimen de precios libres, se ejecutaron reformas comerciales, financieras, laborales y de la actividad económica del Estado. Asimismo, se reformó la ley que gobierna la actuación del Banco Central. Las leyes de responsabilidad fiscal demoraron hasta fines de esa década.

En la presente década, se consolidó el manejo monetario y fiscal, pero el resto de reformas entraron en un estancamiento no solo por las dificultades propias de su mayor complejidad sino también por la falta de respaldo político al más alto nivel. Nos referimos al resto de políticas públicas como las concesiones público-privadas, la reforma laboral, las exoneraciones y la evasión tributaria, el acceso a financiamiento para las pymes, los cambios en los sistemas públicos de educación y salud y la definición de otras políticas de alivio a la pobreza, entre otras. El diseño y la puesta en marcha de estas políticas son más difíciles que estabilizar la economía o bajar aranceles. En efecto, se requiere de una mayor burocracia profesional y de continuidad de políticas y, además, los frutos son más lentos.

La ejecución de estas políticas públicas no ha estado a la altura del manejo puramente macroeconómico, que ha destacado en lo que va de la década. A la luz de los resultados y en relación con sus pares regionales, el manejo macroeconómico ha sido el mejor dentro del conjunto de políticas económicas seguidas en el país. Pero, no veamos ahora las notables cifras macroeconómicas que nos hacen destacar en la región. Veamos las otras.



Pobreza

Con un crecimiento cercano al 5%, la pobreza ha venido disminuyendo lentamente durante el periodo 2002-2005. Luego del alto crecimiento de 2006, disminuyó con mayor rapidez. En episodios de acelerada expansión económica, dicha tasa cede más rápidamente. Ello se observó en 2007: crecimiento alto de 9%, inflación promedio de 1.8%. Ello hizo posible una reducción del porcentaje de pobres de casi 5%.

Por otro lado, la pobreza ha caído más en las ciudades que en las áreas rurales. Asimismo, la pobreza en el campo es más del doble que la existente en las zonas urbanas. Se observan grandes desigualdades entre Lima y el resto del país. En suma, la pobreza afecta especialmente a gran parte de la sierra rural.

Desigualdad

La pobreza es menor en Lima que en el resto de ciudades del país, pero mucho mayor en las áreas rurales. Al observar los diferentes quintiles de la población, se constatan las grandes diferencias que existen en los ingresos familiares. Las 25 regiones del Perú muestran patrones de pobreza e ingresos muy diversos. Las más ricas y que, en general, se han

Cuadro 1: Resultado de la evaluación censal de docentes, 2006

Niveles de logro en:		Niveles				Total
		0***	1	2	3	
Comprensión de textos*	Urbano	28%	16%	28%	28%	100%
	Rural	42%	16%	26%	17%	100%
Razonamiento Lógico	Urbano	43%	42%	14%	1.90%	100%
Matemático**	Rural	56%	32%	12%	0.70%	100%
Número de docentes que participaron de la evaluación		174491				

Notas: * Nivel 1: Ubica datos evidentes e identifica el tema central del texto.
 Nivel 2: Realiza inferencias sencillas a partir de las ideas del texto.
 Nivel 3: Logra contrastar e integrar las ideas del texto, realiza inferencias más complejas.
 ** Nivel 1: Realiza cálculos aritméticos simples, reproduce procedimientos rutinarios cortos.
 Nivel 2: Establece relaciones matemáticas, adapta procedimientos rutinarios y estrategias sencillas.
 Nivel 3: Resuelve problemas de varias etapas elaborando estrategias adecuadas.
 ***Nivel 0: Resuelve sólo algunas preguntas del nivel 1.

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2008-2010 Elaboración: Macroconsult

Cuadro 2: PEA ocupada 2006

Tipo de empresa		Número de trabajadores	PEA Ocupada *	%
MYPE	Autoempleo	I	3,006,626	23.2
	Micro	Entre 2 y 4	5,759,910	44.5
		Entre 5 y 9	1,945,017	15.0
	Pequeña	Entre 10 y 19	702,528	5.4
		Entre 20 y 49	360,082	2.8
Mediana		Entre 50 y 250	528,320	4.1
Grande		Más de 250	629,511	4.9
Total			12,931,994	100.0

* No incluye personal de las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional.

Fuente: ENAHO 2006 (INEI) Elaboración: Macroconsult

Esta realidad laboral viene acompañada de baja productividad, bajos sueldos y falta de acceso a derechos laborales, como vacaciones, jubilación y seguros médicos. Ante este panorama, cualquier estrategia de desarrollo debería plantearse seriamente el problema laboral, tomando en cuenta simultáneamente los derechos de los trabajadores y los bajos niveles de productividad de las mypes, lo cual dará lugar a un esquema de derechos progresivos.

Igualdad de oportunidades

Resulta claro que el Estado peruano no ha tenido capacidad de respuesta ante las enormes carencias de la población. Por ello, no podemos hablar de desarrollo mientras estas cifras desoladoras se mantengan en el país. Es evidente que la estabilidad macroeconómica no basta y que el proceso de desarrollo será lento, pero podría haber comenzado.

LA NOTIFICACIÓN CHINA DEL PRESIDENTE GARCÍA

Juan Carlos Ubilluz*

En la Segunda Cumbre Empresarial de la ALC-UE (América Latina y El Caribe-Unión Europea), el presidente García se pasa cerca de cuatro minutos remachando una idea que se resume en esta frase (suya): “Sin libertad política, no hay libertad económica, no hay inversión. Y viceversa, sin libertad económica no existe verdaderamente la libertad política”. Si el Presidente arriesga el tedio de su auditorio, es porque quiere dejar en claro que el único orden social aceptable para el siglo XXI es aquel donde capitalismo y democracia se hallan inextricablemente enlazados, a saber, el orden liberal democrático. Y sin embargo, mientras avanza en su discurso, el lazo entre democracia y capitalismo empieza a deshacerse en favor de la primacía de este último: “Una democracia de pobreza, de distribución de recursos escasos, una democracia de administración de miseria no es ni socialismo ni democracia, es simplemente miseria y recursos escasos. Para que haya democracia se necesita inevitablemente crecimiento”. Entiéndase bien: no es solo que una democracia sin capitalismo no pueda dar una buena calidad de vida a sus ciudadanos. Es además que, sin el crecimiento económico del sistema capitalista, la democracia no es realmente democracia.

Admitamos que, si García puede modificar la definición de democracia de esta manera, es porque ella es un significante flotante, es decir, un significante vacío, sin significado, que solo adquiere uno a través de otros significantes. Tanto los norteamericanos como los soviéticos, tanto los soldados peruanos como los militantes de Sendero Luminoso se han colocado sin intención deshonesto bajo el estandarte de la democracia. Y es que, en rigor, un significante no produce un significado por sí solo; para que haya un



significado, debe haber al menos dos significantes. Con el significante es igual que con la mercancía: sin la mercancía B que le sirva de espejo, la mercancía A no tiene valor de cambio: de igual manera, sin el espejo del significante “esencial” (democracia socialista) o del significante “formal” (democracia burguesa), el significante “democracia” no tiene un significado preciso. A pesar de que democracia es un significante que rige el campo de la política (un significante amo) —cualquier grupo o partido que se oponga a la democracia es inmediatamente descalificado del juego político—, este no significa realmente nada sin otro significante.

[...] definición de García es aun más audaz que las anteriores. Para él, en el concepto de democracia, en el corazón mismo de su concepto, se aloja el capitalismo. La democracia es ahora el capitalismo más todo aquello que en la democracia no presenta obstáculos para el capitalismo.

No obstante, la definición de García es aun más audaz que las anteriores. Para él, en el concepto de democracia, en el corazón mismo de su concepto, se aloja el capitalismo. La democracia es ahora el capitalismo *más* todo aquello que en la democracia no presenta obstáculos para el capitalismo. O para decirlo mediante una fórmula sencilla: Democracia = Capitalismo + Democracia pro-capitalista. Luego de esta definición, ya no provoca decir que la democracia es el significativo amo de la política. A menos que hundamos la cabeza en la tierra como el avestruz, es difícil no advertir que el capitalismo es ahora el significativo amo y la democracia el significativo dama-de-compañía.

Por otra parte, el discurso de García posiciona al capitalismo y a la democracia en una secuencia temporal. No podría ser de otro modo. Si para que haya democracia se necesita crecimiento económico, el capitalismo es la precondition de la democracia. Así, reclamar hoy en día derechos democráticos es una actividad fútil. ¿Cómo sería posible exigir en la actualidad derechos democráticos cuando en el Perú no hay democracia (ya que no ha crecido económicamente lo suficiente para ser realmente una)?

Se notifica que, ante la nueva Ley democrática, todo acto democrático es antidemocrático

En una entrevista en las vísperas de la Cumbre ALC-UE, el presidente García declara lo siguiente: “Si se va a poner en juego el orden, la seguridad y la estabilidad democrática del Perú, no dude de que el Gobierno hará cuestión de Estado para que eso no ocurra. Ya están notificados”.¹ Según el *Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia*, una notificación “es el acto de hacer saber alguna cosa jurídicamente, para que la noticia dada a la parte le pare de perjuicio en la omisión de lo que se le manda o intima”. A diferencia de un simple aviso, la notificación se realiza a través de ciertos procedimientos formales a fin de proteger a la parte de la arbitrariedad de la persona que ocupa el cargo estatal (un juez, un ministro). Para que haya realmente notificación, no basta con que la autoridad

del Estado informe a la parte mediante algún amigo en común. Es necesario que la autoridad avise a la parte mediante algún rito jurídico (publicando la notificación en *El Peruano*, por ejemplo). Pues una vez notificada correctamente, la parte es puesta en deuda para con la Ley; ella está obligada a realizar aquello que la Ley manda o intima; de lo contrario, habrá consecuencias...

Si decimos todo esto, no es para resaltar lo evidente: a saber, que el Presidente no ha realizado el rito necesario para que su aviso sea una notificación. Entendemos, por supuesto, que él se sirve de esta palabra de manera metafórica, mas debemos señalar que, al hacerlo, transmite a la parte la sensación de que ya está en falta para con la Ley, y de que, de seguir en esta vía, el uso de la fuerza represiva del Estado estará plenamente justificado. Ahora bien, ¿cuál es la parte notificada por el Presidente? En la entrevista aludida, la parte no es otra que “un cargamontón preparado y urdido para eliminar el orden democrático en el Perú”. Al abstenerse de identificar a la parte, García implícitamente estigmatiza a todos sus opositores como enemigos de la democracia. Todos aquellos que han manifestado su descontento contra las políticas del gobierno —ONG, organizaciones de derechos humanos, el Partido Nacionalista, sindicatos, movimientos indígenas, etc.—adquieren así el aura de la gran amenaza roja.

[...] la Ley democrática ha cambiado, no es la misma de antaño. Si los opositores de García se creen amparados por ella, es porque no se han enterado de que la nueva Ley democrática prohíbe las manifestaciones democráticas que perturban la inversión extranjera, la cual hará crecer al país hasta convertirlo, en algún momento futuro, en una verdadera democracia.

Pero, además, al no identificar a los notificados, García elude dar cuenta de sus faltas en específico, lo cual resulta conveniente, pues la única falta de los enemigos de la democracia ha sido expresar democráticamente su oposición al neoliberalismo aprista. Esto, sin embargo, no es lo principal. Lo principal es que, al evitar la mención de las faltas, García esquiva a la vez el enunciar la razón por la cual los notificados están de todos modos en falta con la democracia. Digámosla de una vez: la Ley democrática ha cambiado, no es la misma de antaño. Si los opositores de García se creen amparados por ella, es porque no se han enterado de que la nueva Ley democrática prohíbe las manifestaciones democráticas que perturban la inversión extranjera, la cual hará crecer al país hasta convertirlo, en algún momento futuro, en una verdadera democracia. Así, si durante la Cumbre ALC-UE ellos hubiesen producido un ruido que asustara a los inversionistas extranjeros, su acción habría sido profundamente antidemocrática, pues habrían retardado la llegada de la democracia verdadera.

A diferencia de lo que piensan ciertos sociólogos amantes del folklore, el gesto autoritario de García no es el fruto de nuestra herencia incaica o colonial. Su autoritarismo se soporta más bien en el viejo saber modernizador de que los países del Tercer Mundo necesitan concentrarse en el crecimiento económico. Como lo explica Fareed Zakaria, director de *Newsweek International*, el intento de extender los derechos democráticos al grueso de la población tercermundista tiene como resultado un populismo que culmina inevitablemente en la catástrofe económica y el despotismo político.² No hay mejor ejemplo de ello que el primer gobierno de García, cuya “revolución en democracia” batió records inflacionarios, empobreció radicalmente a la población y produjo las condiciones óptimas para el ascenso al poder del fujimontecínismo.

El autoritarismo de García es así el de aquel que ha aprendido la lección; no solo porque está arrepentido y no repetirá sus errores pasados sino porque ahora ha recibido, de los sectores más conservadores del país, las tablas de la Ley objetiva de la necesidad histórica,

la Ley del progreso teleológico del capital. En esto, no difiere mucho de Fujimori, a quien se le entregaron las mismas tablas en una base militar. De allí, la renuencia de García a reemplazar la Constitución del 93 por la del 79, así como su cada vez más explícito deseo de imitarlo en la disolución del Congreso. Irónicamente, lo que comenzó como un trasnochado pacto contra la derecha (contra la candidatura de Mario Vargas Llosa) se convirtió en una sólida afinidad ideológica de derecha. García y Fujimori tienen sin duda muchas diferencias políticas, mas ambos ocupan el mismo lugar estructural del agente-instrumento de la nueva Ley democrática.

Si se piensa que exageramos, que deformamos el sentido de las palabras del Presidente, es porque no se ha prestado suficiente atención al fin de su discurso en la Segunda Cumbre Empresarial, donde se menciona a China como una “economía ejemplar” que influirá favorablemente al Perú y al mundo entero. De manera sorprendente, el mismo discurso que comienza con el mantra de que no hay ni debe haber excepción al vínculo entre capitalismo y democracia termina con el elogio del país cuyo impresionante crecimiento económico ha sido posible gracias a una igualmente impresionante represión política. China no ha crecido a pesar del sistema comunista sino que el autoritarismo de este sistema permitió amordazar a quienes se oponían al desarrollo capitalista liderado por la inversión extranjera. China no es así simplemente la excepción a la regla que, cual un desliz freudiano, irrumpe en el discurso de García para refutar que el modelo democrático-liberal sea la única vía posible para el Perú. China es el desliz que nos hace saber que, para García, el modelo a seguir es el del autoritarismo político y la libertad económica. China, entonces, no es la excepción a la regla; es la excepción que funda la regla (la Ley) desde la cual García notifica a sus opositores.

Trabajen, trabajen, que la democracia puede esperar...

Por supuesto, el Perú no calcará el modelo de China. A diferencia del Partido Comunista de este país, el partido aprista no formará a los compañeros para convertirse en una clase de administradores especializados en sacar provecho del ingreso del país a la globalización. Todo parece indicar, más bien, que el Estado aprista se limitará a servir de vínculo entre nuestra oligarquía rentista y el capitalismo internacional. Lo que sí podemos esperar es que sostenga este vínculo con un látigo asiático. Si bien García es conocido por ser el entusiasta abanderado de proyectos trunco (el tren eléctrico, la nacionalización de la banca, la lucha contra la corrupción, etc.), y a pesar de que el reciente papelón de las fuerzas del orden en Moquegua nos hace dudar sobre la eficacia de su látigo, esta vez hay que tomarlo en serio pues, esta vez, García actúa en el sentido de una necesidad histórica producida y respaldada por las transnacionales, el sistema financiero global y los grupos de poder económico del país.

Una vez más, el supuesto de García es que solo las sociedades económicamente desarrolladas pueden ser democráticas. Así, cuando el Perú haya atravesado el crudo invierno autoritario, entonces podrá gozar de la primavera democrática. La pregunta evidente es ¿cuánto durará el invierno?

Una vez más, el supuesto de García es que solo las sociedades económicamente desarrolladas pueden ser democráticas. Así, cuando el Perú haya atravesado el crudo invierno autoritario, entonces podrá gozar de la primavera democrática. La pregunta evidente es ¿cuánto durará el invierno? Y la respuesta se encuentra en la China, en el modelo a seguir. A pesar de haber crecido un promedio de 9% anual desde que inició sus

reformas en los años setenta, la primavera democrática no parece más cercana para su pueblo. Como lo explica Slavoj Žižek, lo inquietante de China es “la sospecha de que su capitalismo autoritario no sea un mero recuerdo de nuestro pasado, la repetición del proceso de acumulación capitalista que, en Europa, transcurrió entre los siglos XVI y XVII, sino un signo de futuro”.³ ¿Qué pasaría si el presidente García tuviese más razón de lo que imagina y el capitalismo autoritario de China acabase desplazando al capitalismo liberal para convertirse en el modelo a seguir para el mundo, incluso para los países del primer mundo de Occidente? ¿Y si el triunfo de ese modelo invernal —se calcula que China será en 2030 la nueva potencia del globo— significara para nosotros que la primavera democrática nunca llegará?

Todo esto nos recuerda la famosa frase que, según Jacques Lacan, resume la lógica del superyó: “Trabajen, trabajen, y en cuanto al deseo, este puede esperar”. Para Sigmund Freud, el superyó es una feroz conciencia moral ante la cual el yo siempre está en falta. De internalizarla, el individuo contrae una deuda impagable con la ley moral. Y es que el superyó es un círculo vicioso hecho de culpa y obediencia que se rige siempre por la lógica del *más*: mientras *más* se obedece al mandato moral del superyó, *más* culpable se siente uno de no haberle obedecido; mientras *más* se sacrifica uno por cumplir con su imperativo, *más* culpable se siente uno de no haber realizado los sacrificios necesarios para cumplir con él. Como ya lo había señalado Freud, la conciencia moral “se comporta más severa y desconfiadamente cuanto más virtuoso es el hombre, de modo que, en última instancia, quienes han llegado más lejos por el camino de la santidad son precisamente los que se acusan de la peor pecaminosidad”.⁴

Aquí habría que preguntarse de dónde extrae el superyó su energía culposa con la cual tortura al individuo. Si el superyó es la culpa de que el yo no esté a la altura del ideal, ¿por qué los esfuerzos por acercarse a él culpabilizan aún más al sujeto?

Sencillamente porque la culpa de no estar a la altura del ideal esconde una culpa más profunda, la culpa de renunciar al deseo; es de esta renuncia de donde extrae el superyó la energía para relanzar al yo hacia el ideal. Cuando en el *Seminario VII* Lacan afirma que “la única cosa de la que se puede ser culpable es de haber cedido en su deseo”,⁵ introduce en la forma misma de su afirmación la idea de que ceder en el deseo activa la culpa superyoica. Dicho de manera prosaica, la renuncia al deseo es el carbón de la locomotora del superyó, que avanza siempre por los rieles del ideal.

Ahora estamos en condiciones de entender el peligro de elevar el crecimiento económico de China al rango del ideal a imitar. Ante este ideal del capitalismo autoritario, los peruanos estaremos siempre en falta: mientras *más* sacrificios democráticos hagamos por crecer, *más* culpables seremos de no haber crecido lo suficiente. Mientras *más* nos sometamos al látigo del nuevo amo capitalista, *más* culpables seremos de no

habernos sometido suficientemente. Y lo que no podemos darnos el lujo de olvidar es que toda esa culpa acompañada de nuevos votos de obediencia, extraerá su energía de la culpa más profunda de ceder en nuestro deseo democrático.

Es por ello que, ante la notificación china del Presidente, la única respuesta posible es rechazar todo aplazamiento de la democracia. La democracia no es una primavera que llegará mañana si actuamos de acuerdo con la necesidad histórica. La democracia solo existe en tiempo presente: es aquello que aparece cuando no se renuncia al deseo de luchar contra y desde el “invierno de nuestro descontento”. En el contexto del Perú actual, la democracia debe definirse como la libertad política de desafiar hoy, ahora, lo que el Amo capitalista considera (económicamente) necesario. Si no se asume esta definición, la democracia adquiere automáticamente el significado que García le da. ■

* Doctor en Literatura Comparada de la Universidad de Texas en Austin

1. Diario *El Comercio*, 11-05-2008.
2. Fareed Zakaria, *The Future of Freedom. Illiberal Democracy*. W.W. Norton & Company, Nueva York, 2003.
3. Slavoj Žižek, “Un poco de perspectiva”. En *Le monde diplomatique*, edición peruana. Año II, no. 13. Pág. 26.
4. Sigmund Freud, *Malestar en la cultura*. En *Obras completas*. Tomo III. Biblioteca Nueva, Madrid, 1981. Pág. 3055.
5. Jacques Lacan, *Seminario VII*. Paidós, Buenos Aires, 1988. Pág. 382.

ALAN GARCÍA: pensamiento Haya y modernización

José Luis Rénique*

A pesar de su título, tan solo veinte de las 133 páginas de *La revolución constructiva del aprismo. Teoría y práctica de la Modernidad* (Lima 2008), de Alan García Pérez, están dedicadas al futuro: a presentar las “siete modernizaciones” que se propone concretar en su segundo quinquenio presidencial. A una exploración del alma partidaria —que se resuelve en un intento de compaginación del actual curso pro-mercado del régimen con el pasado radical del partido gobernante— está dedicado el grueso del texto; a esclarecer qué significa ser aprista en una era pragmática, post-ideológica —en que “el pueblo quiere resultados y no gritos o ideologías”— y frente a la ingrata memoria de una primera experiencia de gobierno en que —como reconoce el propio García— un exceso de “ideologismo” condujo a cometer “graves errores” de apreciación. Siendo como es la historia del APRA, en una revisión de la vida y obra de su líder histórico deriva, inevitablemente, la búsqueda de respuestas.

Haya el visionario, el combatiente

El texto de García Pérez puede compararse con el de Luis Alberto Sánchez, *Haya de la Torre o El Político. Crónica de una vida sin tregua* (Santiago de Chile: Editorial Ercilla, 1934) con el fin de ubicarlo en la larga historia del movimiento aprista. Dos momentos distintos, en perspectiva, en la construcción del mito hayista.

La figura de un individuo que, debiendo haber sido “hombre de sociedad, diputado, catedrático, político, músico, escritor o ministro”, optó por “su terco y voluntarioso destino de político nuevo, con su cortejo de persecuciones y dolores” emerge de las páginas de Sánchez. Su entrega y su heroísmo eran los valores a



destacar en tiempos en que pugnaba el PAP por sobrevivir. Superiores a cualquier acusación de haber renunciado a los objetivos insurreccionales primigenios —para abrazar la vía electoral— eran, según Sánchez, sus logros políticos: haber logrado traducir el dolor en acción y la persecución en razón de vida, coadyuvando a forjar así el alma “indestructible” del primer gran partido popular de la historia del Perú. De la sucia política oligárquica, como su superación moral e intelectual, por el sendero abierto por Manuel González Prada, surgía este hombre sin igual que había sido aclamado en la Universidad de Oxford, que leía las “Lecciones sobre la Historia Universal” de Hegel bajo la mortecina luz de las mazmorras de la dictadura sanchecerrista y en cuya defensa se movilizaban luminarias tales como Albert Einstein, Romain Rolland o Miguel de Unamuno. Mezcla singular, en suma, de visionario y combatiente, ejemplo vivo de un movimiento cuyos jóvenes militantes iban a la muerte con su nombre en los labios. Como esos jóvenes trujillanos que, camino al cadalso, observan un lema partidario inscrito en un muro vecino a la ciudadela de Chan Chan. “Miren ese letrero, compañeros,” grita entusiasta uno de ellos, “eso lo pintó el Jefe con sus propias manos. A él lo matarán como a nosotros. Pero él no pide clemencia. Él sabe morir. Hay que ser

valientes, compañeros. Seamos dignos del APRA y del Jefe. Solo el Aprismo salvará al Perú”.

Superiores a cualquier acusación de haber renunciado a los objetivos insurreccionales primigenios —para abrazar la vía electoral— eran, según Sánchez, sus logros políticos: haber logrado traducir el dolor en acción y la persecución en razón de vida [...]

El cambio en el discurso y las primeras disidencias

Eventualmente, sin embargo, el mito del Jefe combativo sería puesto en cuestión. En 1945, el retorno a la legalidad demandaba adecuar al partido a los requerimientos de un gobierno de coalición; domeñar, por ende, el ímpetu radical original. En ese contexto, como ha observado Peter Klaren, el estilo de conducción de los años de la persecución —de agitar el espíritu radical en el frente interno mientras, hacia fuera, se efectuaban importantes concesiones político-ideológicas— se convertiría en una desventaja. Sin una propuesta clara, bajo nuevas y múltiples presiones, se acentuó entonces la ambigüedad, hasta convertirse en un patrón táctico, consistente en “estimular al ala militante” del aprismo para luego “ponerse de lado de los moderados”, que el 3 de octubre de 1948 habría de llegar a su punto crítico. Entonces, un levantamiento impulsado por el ala insurreccionalista del PAP fue desconocido por la dirección. Decenas de “defensistas” apristas dejaron sus vidas en las calles del Callao. El golpe de Odría vendría tres semanas después. Y, con ello, una nueva era de clandestinidad que se prolongaría hasta el inicio de la “convivencia apropiada” en 1956.

Bajo la influencia de movimientos como el peronismo y las revoluciones boliviana y guatemalteca, se atrevieron los desterrados a discutir la palabra del Jefe. Una larga lista de connotados militantes —de Ciro

Alegría a Eduardo Enríquez (el primer secretario general del “partido del pueblo”), pasando por Magda Portal—, más aun, optaron por la ruptura. La ausencia misma de Haya, encerrado por cinco años en la embajada colombiana en Lima, marcó una diferencia fundamental con la “primera clandestinidad” en que su presencia en la trinchera de lucha le había conferido una aureola heroica. Su drástica revisión del “antiimperialismo” primigenio, su adhesión a la “doctrina Truman” en plena guerra fría y su fascinación con el modelo capitalista escandinavo alentaron la rebeldía juvenil dentro del PAP. Las alianzas con Prado y posteriormente con Odría, y las guerrillas del 65 encabezadas por un ex-militante aprista como Luis de la Puente Uceda estimularon aún más la crisis de fe.

Haya según García, el pensador incomprendido hasta por sus propios compañeros

Alan pareciera querer rescatar a Víctor Raúl de estas vicisitudes políticas, entronizándolo para ello como pensador y liberándolo, de tal suerte, de las amargas contingencias de una trayectoria política que lo convirtieron en una figura tan afamada como controversial. El autor-mandatario nos invita a dirigir la atención no a los inescrutables acontecimientos políticos —en cuyo tratamiento había encontrado Sánchez la excepcionalidad del personaje— sino a “los nuevos conceptos creados por Haya de la Torre en un proceso dialéctico de muchos años, a través de miles de páginas, discursos y capítulos de sus libros”. Si, en Sánchez, la palabra escrita era más bien un instrumento de combate, esta es concebida como la sustancia misma del legado hayista en el texto de García. De aquella obra, la superación del “determinismo histórico” marxista habría sido el núcleo central: elemento fundacional de un pensamiento que “nunca se congeló, ni en el origen ni en el tiempo”. El aprismo —nos recuerda el mandatario citando a su maestro— “no es un dogmatismo cerrado o arbitrario sino una línea de acción al infinito”.

El autor-mandatario nos invita a dirigir la atención no a los inescrutables acontecimientos políticos —en cuyo tratamiento había encontrado Sánchez la excepcionalidad del personaje— sino a “los nuevos conceptos creados por Haya de la Torre en un proceso dialéctico de muchos años, a través de miles de páginas, discursos y capítulos de sus libros”.

No son el desdén o las distorsiones de los adversarios, sin embargo, el peor enemigo del hayismo, sino el olvido y la incomprensión de los propios apristas. No entendieron, sostiene García, el sentido de su obra de “filósofo social del cambio”. Muy pocos —añade— “fueron conscientes o lo siguieron” en ese esfuerzo conceptual; “más fácil y excitante era repetir los conceptos de 1926 sin un esfuerzo dialéctico de transformación”. Pensaron que su planteamiento de un “interamericanismo sin imperio” o su “plan para la afirmación de la democracia en las Américas” eran “planteamientos tácticos” o meras “concesiones momentáneas”. Optaron por ello por “ignorar por completo la existencia de esas tesis”. Lectores de un solo texto —El *Antiimperialismo* y el APRA—, habían congelado al aprismo, mientras el pensamiento de Haya se desarrollaba abriendo nuevos caminos; condenándole, de tal suerte, a la mayor “soledad”, cayendo, como consecuencia, en “una gran confusión entre aprismo y extremismo, entre democracia social y capitalismo, entre nacionalización y estatismo”. Desorientados, terminarían algunos de ellos intentando construir “una línea divergente” al interior del PAP, visión que se traduciría en “el estallido y fracaso de la revolución de octubre de 1948,” en el “guevarismo” de los años 60 o en el velasquismo de los 70. Son los mismos —anota Alan— que “sin comprender cabalmente a Haya”, sostienen hoy que “el APRA se ha derechizado”.

El propio García y su generación serían víctimas de ese “grave error de interpretación” que traería como consecuencia, “adoptar como si fueran apristas” muchas de las “estatizaciones” velasquistas, en una “confusión que se expresó después, durante el gobierno aprista de 1985-1990”.

Evitar confusiones tales, precisamente, es el objetivo de *La revolución constructiva del aprismo*. Un “estudio probado y textual” —subraya su autor— sobre las “diferentes etapas en la construcción del aprismo”, demostración rotunda de que fue Haya un “genio dialéctico, intuitivo y realista” que logró comprender como nadie los profundos cambios que desde 1930 se produjeron en el Perú y el mundo.

El nuevo canon y las siete modernizaciones

El nuevo canon del aprismo queda así establecido: quien “estudie en profundidad y detalle,” en “su orden científico e histórico”, comprobará “la capacidad creativa del gran conductor y comprenderá el sentido y el diseño de sus preocupaciones por la construcción de la democracia social, de la justicia y del desarrollo social”. Quien, por ende, no lo entendiese así —limitándose a “repetir una frase o un solo momento de su camino” — “traicionaria” la “esencia misma del aprismo.” Porque ser aprista en el Perú de hoy es “tener orgullo del pensamiento de Haya de la Torre” y “comprender integralmente” las “diferentes etapas” de su pensamiento esforzándose por continuar su acertada interpretación de los cambios del mundo. Ser aprista, más aun, es no caer en el “complejo” de buscar la “aprobación comunista” para sentir que no somos derechistas.

Así leída la trayectoria aprista, cae por su propio peso el argumento sobre el momento actual: confrontadas a la nueva realidad del siglo XXI, “todas las tesis y la doctrina de Haya de la Torre” están presentes en las siete modernizaciones propuestas por la administración García: (a) afirmación de la democracia, (b) consolidación del papel regulador y control del Estado reivindicando al Estado Antiimperialista, (c)

promoción de la descentralización, (d) erradicación de la miseria y del analfabetismo, (e) impulso de la educación y el empleo vía la inversión y la transferencia tecnológica, (f) modernización en el área de la salud y (g) modernización en la administración de la justicia y la seguridad ciudadana.

¿Existe dentro del APRA una lectura alternativa del legado hayista que amerite tal preocupación? ¿Cuántos en el viejo partido comparten, por ejemplo, la visión —expuesta por Armando Villanueva del Campo en un discurso en el Aula Magna, en enero del 2007— según la cual no es el actual un gobierno propiamente aprista sino uno de coalición, preámbulo, realista e inevitable, de una futura administración de izquierda democrática [...]?

No son meras medidas administrativas. Su viabilidad depende de un crucial factor subjetivo. De la exigencia, es decir, de “revolucionar el mundo emocional y reivindicativo que está detrás de todos los

que ansían la justicia”; de superar “concepciones fatalistas” y ese “pensamiento mágico”, ese “temor mitológico y panteísta” que, por ejemplo, lleva a decir que la selva “debe ser de nadie, mientras los madereros ilegales y los cocaleros destruyen el medio ambiente, sin pagar impuestos y sin crear empleo formal”.

Sus partidarios, más que el ciudadano común, aparecen como destinatarios de *La revolución constructiva del aprismo*. El destino de la más duradera identidad de la precaria historia política peruana es puesto en debate por el texto presidencial. Sus múltiples referencias a los “complejos” partidarios que le impiden apropiarse de lo esencial del aprismo lo sugieren así.

¿Existe dentro del APRA una lectura alternativa del legado hayista que amerite tal preocupación? ¿Cuántos en el viejo partido comparten, por ejemplo, la visión —expuesta por Armando Villanueva del Campo en un discurso en el Aula Magna, en enero del 2007— según la cual no es el actual un gobierno propiamente aprista sino uno de coalición, preámbulo, realista e inevitable, de una futura administración de izquierda democrática, o los debates sobre aprismo y neoliberalismo que tienen lugar en la blogósfera aprista y filoaprista? O es el caso más bien, como ha observado recientemente Julio Cotler, que “el Apra es Alan” y, fuera de eso, simplemente “no hay nada más”. ■■

* Estudió Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Columbia, Nueva York. Actualmente profesor principal en City University of New York.

LA EDUCACIÓN COMO PROYECTO POLÍTICO-CULTURAL

¿Un olvido voluntario?

Ricardo Cuenca*

Hacia finales de los 80, durante el período de “desmontaje” de la reforma educativa del gobierno de Velasco, distintos actores de la escena política y académica visibilizan la crisis educativa en el país. Es en este contexto que el diagnóstico general de la educación de 1993,¹ elaborado por un conjunto de expertos y funcionarios del Ministerio de Educación, con el acompañamiento de la cooperación internacional, confirma la crisis educativa. El panorama presentado en el diagnóstico destacaba la inexistencia de un programa nacional de educación y exponía como algunas de las razones que explicarían esta situación el mal desempeño de los docentes, la poca pertinencia curricular, los inadecuados textos escolares, la ineficiente gestión del sector, la falta de equipamiento escolar y la precaria infraestructura de las escuelas.

Ante esta evidencia y sin preguntarse por el porqué de estos problemas, el gobierno de Fujimori responde con la puesta en marcha de un conjunto de acciones que enfrentan puntualmente y, muchas veces de manera desarticulada, los problemas educativos identificados. Estas acciones, enmarcadas en una noción de *calidad*² basada en el mejoramiento de los insumos del sistema educativo (material educativo, currículo, capacitación docente, etc.), no tuvieron los resultados esperados, tal como posteriormente lo demostraron las evaluaciones nacionales de rendimiento estudiantil.

Cabe preguntarse entonces el porqué del fracaso. ¿Es posible que las causas identificadas en el diagnóstico del 93 no hayan sido las más importantes o que las soluciones propuestas no tuvieran en cuenta los puntos de partida y la compleja y diversa realidad de la



sociedad peruana? Sí, es posible y, lamentablemente, la duda nos seguirá acompañando, pues nada de lo realizado en esta época fue evaluado suficientemente.

[...] propongo considerar que la educación es —además de un proceso pedagógico de enseñanza y de aprendizaje— un proyecto político-cultural de las élites que reconocieron en los proyectos de formación de la sociedad los mecanismos para viabilizar sus objetivos e intereses.

Esta situación me lleva a proponer una discusión sobre un aspecto que puede darnos luces para comprender esta perdurable crisis educativa: la ausencia de orientación político-cultural en las propuestas de mejora de la educación, entendiendo esto como el proyecto de país pensado desde las élites de poder (la mayoría de veces gobernantes), que marca el derrotero educativo. Desde esta perspectiva, propongo considerar que la educación es —además de un proceso pedagógico de enseñanza y de aprendizaje—

un proyecto político-cultural de las élites que reconocieron en los proyectos de formación de la sociedad los mecanismos para viabilizar sus objetivos e intereses.

En efecto, las discusiones de los 90 sobre los problemas de la calidad educativa peruana, sus causas y sus soluciones estuvieron confinadas al ámbito educativo-pedagógico, en el marco de un modelo tecnocrático y eficientista. En tal sentido, la ausencia de un proyecto político-cultural, durante los diez años del gobierno de Fujimori, generó una educación sin un horizonte particularmente definido y sin orientaciones programáticas claras; una educación “vacía” en relación con los cambios sociales y culturales que se producían en el país.

Sin embargo, esto no fue siempre así. En algunos períodos de la historia peruana es evidente que la relación entre la educación y los proyectos político-culturales fue más explícita. Examinemos, a modo de ejemplo, tres hitos en nuestra historia republicana.³

Mirando hacia atrás

En el Perú de principios del siglo XX, las élites políticas, gobernantes e intelectuales hegemónicas en la escena nacional apuestan por el ingreso a la modernidad y la educación fue una de sus más potentes herramientas para poner en marcha este proyecto. La educación “para la modernidad” se centró en la tarea de formar a la población para acceder al progreso económico, al avance científico y a la construcción de una nación homogénea. La educación era concebida básicamente en su dimensión cultural, por ello es que se debía “impartir cultura” entendiendo por ella solo el saber y la cultura occidental.⁴

Durante esta época, el debate educativo entre Alejandro Deustua y Manuel Villarán, a pesar de sus discrepancias, se movía en los límites del proyecto civilista de Pardo. Ya sea apostando por una educación de la élite o educando para el progreso técnico, las reformas educativas debían servir para convertir al país

en un Estado próspero y “culto”, condiciones ineludibles para el progreso moderno.

A mediados del siglo XX, las élites identifican la necesidad de que sus más postergados ciudadanos “asciendan” socialmente, con la finalidad de contribuir con el desarrollo económico del país, a partir de la apuesta por la educación y por una economía abierta a las exportaciones, que otorgaba gran importancia a la inmigración europea y buscaba controlar las manifestaciones sociales sobre una desigualdad que se hacía cada vez más visible.

En esta época, el proyecto odríista de protagonismo del Estado, desarrollo económico e integración social, plasmado en una política social pragmática, fue la base para que se promoviera la expansión educativa y se “modernizaran” los contenidos curriculares. Impulsar la economía del país, a partir de exportaciones, necesitaba de más gente “educada” y universitaria.

Finalmente, durante la década del 70, el gobierno del General Velasco Alvarado instaló una reforma educativa “a medida” para echar a andar un proyecto de país. Las múltiples políticas económicas que contribuirían a la industrialización por sustitución de importaciones o la estrategia de estimulación de la movilización social para el control de los movimientos sociales opositores necesitaban de una educación que estimulara la crítica conectada con la realidad, preparara a los jóvenes para el trabajo técnico y, claro, “encendiera la peruanidad” en los estudiantes, a partir de la valoración de lo andino y la autoafirmación de la nación peruana.

Es entonces que se diseñó un nuevo sistema educativo con modificaciones curriculares, elaboración de material educativo, capacitación de docentes, nuevos espacios de gestión y cambios en los niveles educativos que, aunque enfrentó el reclamo de un magisterio que no fue involucrado y tuvo problemas de concreción, cumplió con su función difusora del

proyecto político-cultural del gobierno revolucionario de la fuerza armada.

De vuelta al presente

Sobre la base de lo revisado, ¿podría afirmarse que las actuales medidas de política educativa constituyen la puesta en práctica de un proyecto educativo que responda a los cambios sociales, políticos, económicos y culturales del país, de los últimos 20 años o se trata tan solo de una continuación de la educación “vacía” de los 90?

El gobierno de Alan García opta por políticas educativas que buscan dar soluciones básicamente eficientistas a problemas que, como los identificados en los 90, parecieran desconocer la dimensión política y cultural de la educación.

Las respuestas no son del todo claras. Las actuales medidas de política del sector educación parecen estar enmarcadas en un enfoque tecnocrático y estar concebidas para solucionar solo los problemas técnico-pedagógicos del sector. El gobierno de Alan García opta por políticas educativas que buscan dar soluciones básicamente eficientistas a problemas que, como los identificados en los 90, parecieran desconocer la dimensión política y cultural de la educación. Ejemplos de ello son la progresiva desactivación de la

Educación Intercultural Bilingüe, que nos acerca a la homogenización, o la errática e impuesta política docente, que reconoce a los profesores solo como insumos de un sistema.⁵

La historia nos ha enseñado que la educación necesita de un proyecto político-cultural para avanzar hacia objetivos claros, pero nos deja también la idea de que este proyecto tiene que ser construido sobre la base de consensos y no solo a partir de los intereses de la elites políticas o de un pequeño grupo de especialistas.

En el país, la existencia del Proyecto Educativo Nacional,⁶ importante por su función orientadora y su capacidad de movilización ciudadana alrededor de la necesidad de una transformación educativa, podría constituirse en el punto de partida para la construcción consensuada de este proyecto político-cultural que oriente las políticas educativas. Pese a ello, el gobierno actual da la espalda a dicho Proyecto y lo considera, principalmente, como el marco general en donde puede ubicar sus medidas de política.

La educación actual necesita incorporar el significado de vivir en un mundo global sin que se pierda la esencia de lo local, reconocer que nuestro crecimiento económico es desigual y que aún quedan históricas discordias por resolver.

Termino preguntándome si es posible que nuestra educación salga de esta crisis sin un explícito y consensuado proyecto político-cultural que la oriente.

* Investigador del Instituto de Estudios Peruanos.

1. Ministerio de Educación, Banco Mundial, PNUD, GTZ, UNESCO-OREALC. *Diagnóstico general de la educación*. Lima: Ministerio de Educación, 1993.
2. Esta noción de calidad formaba parte de la propuesta de la banca multilateral (BM y BID) quienes durante este período apoyaban la mayoría de reformas educativas latinoamericanas.
3. La información histórica ha sido tomada fundamentalmente de Contreras, C. y Cueto, M. *Historia del Perú Contemporáneo. Desde las luchas por la independencia hasta el presente*. Lima: IEP, 2004.
4. Gonzalo Portocarrero denomina a esta irrupción de lo occidental para romper con la cultura andina colonial como la “propuesta etnocida”. Educación e identidad nacional: de la propuesta etnocida al nacionalismo andino. *Debates en sociología*, 17 (10-29), 1992.
5. Recientemente, Lucy Trapnell sostuvo que las medidas de evaluación docente y de ingreso a los Institutos Superiores Pedagógicos están ocasionando que muchos de los pueblos indígenas amazónicos peruanos corran el riesgo de no tener una educación intercultural bilingüe, debido a la falta de maestros. Trapnell, L. *La Educación Intercultural Bilingüe en los tiempos del APRA*. Tarea.68 (45-48), 2008.
6. El Proyecto Educativo Nacional fue reconocido como política de Estado por Resolución Suprema N° 001-2007-ED.

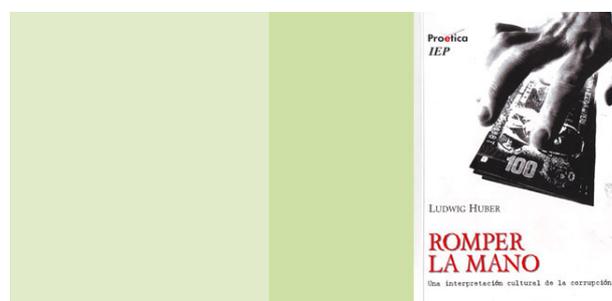
PENSAR LA CORRUPCIÓN DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES.

Reseña: *Romper la mano. Una interpretación cultural de la corrupción*, de Ludwig Huber.

Jaris Mujica*

Si bien la corrupción es un fenómeno que se ha tornado central en los discursos políticos de los últimos años, no ha sido en la misma medida uno de los fenómenos favoritos para la investigación en ciencias sociales. Y es que las aproximaciones al tema han venido sobre todo desde las miradas jurídicas y económicas, perspectivas normativas o de medición de percepciones. En este sentido, el libro de Ludwig Huber es un gran aporte. En efecto, “Romper la mano” es uno de los pocos trabajos publicados en el Perú que pretende estudiar la corrupción desde las ciencias sociales, y más aún, desde una lectura que implica entender la corrupción también como un *fenómeno cultural*.

El libro, aunque dividido en cuatro capítulos, puede ser leído como si estuviera compuesto por dos grandes bloques. El primero (los capítulos I, II y III) presenta un estado de la cuestión sobre la investigación acerca del fenómeno de la corrupción y, el segundo (capítulo IV), un estudio de caso. El estudio bibliográfico del primer bloque muestra un gran trabajo de síntesis, que de manera sencilla, pero clara y rigurosa, resume las principales perspectivas analíticas sobre el tema de la corrupción, así como a los autores más importantes y las interpretaciones que se ha dado del fenómeno. El autor se encarga de mostrar que la corrupción es un problema relativamente reciente para la investigación en ciencias sociales y que es en los últimos veinte años que la importancia del fenómeno renace entre el debate político y académico. Del mismo modo, se hace una lectura de las miradas antropológicas que se han



dedicado al tema, lo que le permite indicar que en lugar de proponer una definición del término, de lo que se trata es de estudiar los usos del mismo. Una revisión de las miradas que buscan en la historia las explicaciones al origen del fenómeno, cierra este bloque de capítulos, en donde se termina indicando que “el discurso reciente sobre la corrupción hace visible una visión generalizada sobre la sociedad, el Estado y la política en su conjunto más allá que el fenómeno mismo” (p. 67). Y en efecto, lo que continúa a esta interesante síntesis es un estudio de caso que muestra un trabajo sobre discursos acerca de la corrupción en Ayacucho.

El segundo bloque pretende ser una parte etnográfica que estudia el problema de la corrupción y, como indica el autor, “pretende cubrir parte de este vacío con un estudio de caso” (p. 69). La primera sección demarca el contexto político y social del espacio estudiado: Ayacucho. Este marco, en el que se muestra la fragmentación y el conflicto como principales características, construye el caso presentado centrado

en dos ejes: la corrupción estudiada como “discurso” y la corrupción estudiada como “hecho”.

En efecto, la comprensión del fenómeno muestra que los discursos sobre la corrupción gestan un sentido común, un espectro sumamente amplio en el que casi todo aquello que es considerado “injusto” es calificado como “corrupción” por las personas en la vida cotidiana (p. 86). En este sentido, más que un estudio sobre los discursos sobre la corrupción, esta sección nos muestra una interesante reflexión sobre las asociaciones que se hacen con la palabra “corrupción”. Para lograr ese objetivo Huber exhibe una serie de titulares de diarios indicando que se trata de un espacio que muestra diversas denuncias contra las autoridades (algunas fundadas, otras no). Desarrolla entonces la idea de que el uso de la palabra corrupción aparece en un contexto de vigilancia, de denuncia, como un elemento de acusación que se puede utilizar de acuerdo a las tensiones y conflictos existentes frente a la autoridad o como un modo de autodefensa.

En estas interesantes páginas, Huber indica que “obviamente, la corrupción solo sirve para la denuncia cuando atenta contra una normatividad aceptada; es decir, su uso utilitario solamente da resultado cuando ella es considerada como mala y perniciosa” (p. 84), lo que mostraría una suerte de moral subyacente y la capacidad de discernimiento de los actores. Sin embargo, queda por indicar que, en la práctica, los sujetos utilizan diversos juegos de moralidades, intereses y estrategias. De este modo, muchos rechazan discursivamente la corrupción, pero al mismo tiempo, esta constituye una forma activa y recurrente en sus propias relaciones sociales.

La sección que se refiere a los “hechos” parte de la idea de que la corrupción es una práctica normalizada en Ayacucho. Esto le permite al autor gestar una clasificación general de la pequeña corrupción “en cinco rubros: comisiones pagadas por servicios ilícitos; pagos injustificados por servicios públicos regulares; cupos; nepotismo y favoritismo; y la malversación de

fondos públicos” (p. 95). La ilustración de estos modos de corrupción se desprende también de casos extraídos de los diarios, algunos testimonios, y aparecen como formas de corrupción en diversas instituciones. Sin embargo, más que prácticas precisas de corrupción, se exponen ciertas modalidades tipificadas. Una sección sobre la corrupción en la educación permite mostrar un esbozo de algunas de las maneras en que la clasificación propuesta se manifiesta (desde el aula hasta la burocracia del sistema educativo). Y es en este punto en el que el argumento de Huber toma fuerza, pues retomando una idea de Gonzalo Portocarrero, indica que “el dejar hacer, la tolerancia a la transgresión, está acompañada por la crítica y la descalificación que brotan del anhelo de pureza, de estar acordes con la ley” (p. 126). Se trata de múltiples formas de complicidad en la vida cotidiana, que normalizan el fenómeno de la corrupción y lo integran en las prácticas de los sujetos.

A propósito de aquello aparece una de las ideas más interesantes: el reconocimiento de la corrupción como un tipo de relación entre los ciudadanos y el Estado. Y es que Huber lo dice de una manera clara, que recuerda la importancia y la actualidad de este campo para la investigación en ciencias sociales. En efecto, indica que los sujetos no experimentan el Estado de una manera total y coherente, sino de manera fragmentada. Es a través de esas interacciones que hay que pensar en las relaciones de los ciudadanos con el Estado. El trabajo de Huber nos permite reconocer dichos espacios y gestar preguntas importantes para continuar la investigación: ¿cómo es que las personas se relacionan con el Estado en la vida cotidiana?, ¿qué estrategias utilizan para ello?

En suma, el primer bloque del libro constituye un material de referencia imprescindible para aquel que quiera investigar el fenómeno de la corrupción desde las ciencias sociales. Una síntesis lúcida, clara y ordenada de los diferentes autores, posiciones y temas implicados en los estudios sobre la corrupción. Un valioso aporte que permite poner un punto de partida

en este trabajo y ordenar las referencias académicas sobre el tema. Pero se extraña un poco que el segundo bloque, dedicado al estudio de caso, no se refiera a prácticas concretas o a datos etnográficos de primera mano, sino sustancialmente a diarios, percepciones y discursos. Se extraña en este sentido, justamente, la descripción detallada de la etnografía. En la misma línea, si bien Huber señala que “la corrupción consiste, en general, en actividades clandestinas que se resisten a la observación participante” (p. 15) creo que sí es posible estudiar estos fenómenos desde su práctica efectiva y no restringirse solamente a los discursos (aunque es claro que existen riesgos metodológicos y dificultades). Pero es el reconocimiento de este límite el que lleva al autor a indicar que “lo que podemos presentar es un estudio sobre la moral pública” (p. 15).

“Romper la mano” no significa destruirla, sino en realidad abrirla a la posibilidad de un soborno, pero también a una alianza simbólica, soportada en estructuras de intercambio, formas complejas de reciprocidad, deudas, dones y contra-dones que requieren estudiarse en las prácticas. El importante y claro aporte de Ludwig Huber deja el escenario para continuar la investigación en el tema y la necesidad de estudiar las prácticas de corrupción en su detalle, mostrando la importancia de etnografiar estos fenómenos, de encontrar maneras para penetrar estas lógicas y estudiarlas reinventando la metodología y las técnicas de recojo de información. Por supuesto, se trata de una tarea compleja, pero también de un reto para la investigación en ciencias sociales: y es que cuando la política tiene “mano dura”, es más costoso “romperle la mano”. ■■

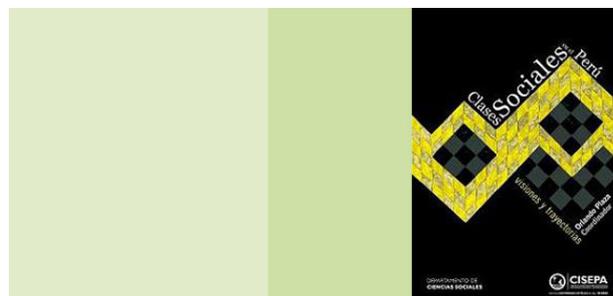
* Magister en Ciencia Política, licenciado en Antropología de la Universidad Católica.

Reseña: *Clases sociales en el Perú. Visiones y trayectorias*, de Orlando Plaza (compilador).

Lima: Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas y Departamento de Ciencias Sociales.

Javier Iguñiz*

El libro que vamos a comentar reúne a dieciséis autores y coautores. Ha requerido entonces de un esfuerzo considerable: nos sitúa en el estado de la cuestión y hace nuevos aportes y preguntas. Quien viene de la economía tiende a ver el tema de manera precisa pero parcial. Las dimensiones no económicas que están presentes en algunas de las definiciones de clase no son tan fáciles de comprender en mi caso o, por lo menos, de captar en su plena densidad y matices. No puedo hacer justicia a la complejidad de las aproximaciones a la realidad social que se presentan en el libro.



Una breve mención a la estructura de la colección de artículos. Tiene cuatro partes que son: Aspectos teórico-metodológicos, Estado y política, Cultura e identidad y Ocupación y lógicas económicas. Los artículos corresponden básicamente bien a estos criterios de agrupación pero, como es natural, los aspectos teóricos y metodológicos están presentes en absolutamente todos y, aunque en menor medida, los temas a los que aluden los títulos de las diversas partes también. Ello en sí mismo pone de relieve la complejidad de las aproximaciones a las clases en el Perú o en los pensadores del tema. Una conclusión de la lectura es que intentar apoyarse en el concepto recibido de clase social para describir la sociedad peruana lleva en todos a ampliar las dimensiones que entran en su constitución. En el extremo, Augusto Castro (227) propone incluir doce elementos a tener en cuenta.

En el primer trabajo de la primera parte, Orlando Plaza elabora un panorama general del debate sobre las clases sociales en los países capitalistas avanzados. La existencia de controversias teóricas en el seno de las sociedades desarrolladas, que no dudamos en definir como basadas en clases sociales, puede tener que ver con el hecho de que ellas tienen diversas dimensiones y pueden ser vistas desde distintos ángulos. Pero nos parece que el debate no es sobre si esas clases, que todos reconocen perfectamente, existen o no. Es, más bien, sobre cual es el mejor ángulo para mirarlas y entender su reproducción y evolución. También sobre cómo han influido en diversas esferas de la vida social. Aleccionado por la lectura del libro, empiezo sugiriendo que en la medida en que en los países subdesarrollados las clases también están subdesarrolladas, quizá por definición, y que las preguntas más comunes son sobre si llegan a existir, si se han constituido plenamente. En caso de que sí, la pregunta es sobre qué espacio llegan a ocupar de una sociedad que, de manera curiosa, es vista como socialmente más amplia, diversa, que la de países desarrollados sea porque las clases no han sustituido plenamente a los estamentos, castas u otros grupos

sociales previamente existentes, o porque tienen mayor diversidad en la organización económica interna que en los países desarrollados, o porque la influencia de ellas en otras subdivisiones es menor y, por lo tanto, éstas no se pueden dar por entendidas recurriendo a las clases.

Como lo declaran muchos autores, el libro es un llamado de atención sobre la necesidad de proseguir el esfuerzo que sus artículos ponen en evidencia. Los hay que pensando el conjunto de la sociedad desde los aportes teóricos o desde experiencias de análisis empírico en el terreno terminan en hipótesis sobre cómo enfrentar una tarea que se reconoce todavía no realizada. Los esfuerzos más empíricos en el texto son sobre lugares, sectores sociales o ramas específicas. El único trabajo empírico sobre el conjunto de la sociedad peruana y que tiene el formato de hipótesis y comprobación es el de Martín Benavides.

Justamente, Benavides (121, 135) recuerda la ausencia y la necesidad de estos estudios empíricos. Este es un hecho que nos parece muy expresivo de un problema más de fondo. Voy a someter a consideración de ustedes la impresión de que el interés o el desinterés en los estudios empíricos dependen del interés o desinterés en el objeto de estudio. Por ello, a las cinco preguntas que plantea Plaza: ¿Qué son las clases sociales?, ¿Cuáles son las unidades de análisis pertinentes?, ¿Qué dimensiones debemos tomar en cuenta? ¿Son causa de otros procesos de desigualdad? ¿Qué relación guardan con la estratificación social? yo añadiría una pregunta que me parece que está en el clima intelectual de hoy: ¿Para qué queremos estudiar las clases sociales? ¿Por qué nos deben interesar las clases?

La respuesta del propio Plaza a la pregunta de porqué es importante estudiar las clases es: porque tienen que ver con la desigualdad. (Plaza: 21, 43) Que ayudan a entender las desigualdades económicas hay poca duda. Pero ¿otras desigualdades? Ciertamente las hay de muy

diversa procedencia. ¿Vale la pena mirar desde las clases otras dimensiones y divisiones de la realidad? Benavides recuerda que hay quienes afirman que no (126) Pero hay un asunto previo ya sugerido. ¿Qué desigualdad? Obviamente la económica es importante. ¿Es la más importante? No es claro que lo sea pero una razón para considerarla así sería que influya en otras desigualdades. Tanto Plaza (24) como Benavides (127) y otros lo manifiestan en estos términos. Pareciera que las desigualdades políticas son bastante autónomas pero no tanto las culturales. López indica que la relación entre el sistema socioeconómico capitalista y las formas de Estado son complejas y están intermediadas por los “clivajes” sociales y por los partidos y los sistemas electorales (141, 191) En el artículo, distintas hipótesis y subhipótesis para el trabajo académico futuro ennumeran muy diversas posibilidades de relación. ¿Qué tiene entonces esa desigualdad que la hace digna de consideración? Las opciones son diversas y es bueno especificarlas aunque sea parcialmente con el fin de establecer en qué aspectos de que tipo de subdivisiones nos interesa indagar. Suponiendo que las clases socio-económicas son el punto de partida, ¿Porque nos interesa la condición de vida de los obreros y los empleados? ¿Porque genera y reproduce la pobreza absoluta en un país? ¿Y si dejan de ser pobres, gracias a la expansión del plusvalor relativo, como en los países ricos nos dejarían de interesar? ¿Porque llevarán al socialismo?

Las clases socio-económicas están indesligablemente ligadas a la realidad de la lucha de clases. Pero en una época en que las viejas afirmaciones se deslegitiman viene al caso la pregunta. ¿Luchan las clases? No hay duda, pero podríamos decir que también se complementan y se necesitan. Por eso, la pregunta tiene que ser, además, sobre la calidad de esa lucha. ¿Qué clase de lucha es la lucha de clases? ¿Simplemente factor de “ruido”, inestabilidad y violencia? ¿Es, más bien, transformadora? ¿De qué? ¿Y si fuera un factor de conflicto estabilizador de la sociedad? Viene, pues, al caso la pregunta: ¿Porqué decimos que la desigualdad entre clases puede

contribuir, nos guste o no nos guste, a transformar la realidad? ¿La realidad de qué o de quienes? Marx, nos recuerda Plaza, supone que pueden transformarla (27). ¿No están ambas clases atadas a su relación? ¿Pueden ser algo más que esa relación; algo aparte de ella? Históricamente, ¿Se enfrentaron desde otra relación o pelearon por establecerla en otros términos?

Craig Calhoun demostró que la lucha más abierta en los comienzos de la revolución industrial fue contra la industrialización y se realizó por los artesanos y pequeños empresarios y no tanto por los asalariados. ¿Qué proyecto de sociedad “portan” los asalariados o las clases subalternas? Como se preguntan Ruiz Bravo et.al.: “¿Cómo sería el orden deseado?” (281). Sin duda, diverso. ¿Qué buscan los asalariados y sus organizaciones? ¿Buscan su inserción en mejores términos en esta sociedad? ¿Son vehículos de democracia? ¿Son para el resto de la sociedad un camino a la conquista de derechos civiles y políticos? ¿Quizá una vía de reconocimiento de su dignidad como ciudadanos y ciudadanas? ¿Se asocian también la emergencia de mestizos e indígenas en el escenario social y político del país? ¿Son la manera de construir una clase media? El interés por las clases, y por su lucha y su conciliación proviene pues, de motivaciones diversas y hasta opuestas. Sin embargo, cualquiera de ellas debería ser suficiente para motivar el estudio cuya carencia anotamos y bastantes autores en este libro recuerdan.

Desde la política económica, por ejemplo, el análisis de clase sigue siendo fundamental porque contribuye a explicar las orientaciones de dicha política. Eso sí, tras el declive de los experimentos de autogestión y cogestión, casi siempre dentro de los marcos de la reproducción de las relaciones sociales en la empresa. Las mejoras ocurren a pesar del enorme dominio de los intereses de los capitalistas, cuando el crecimiento genera escaseces de mano de obra y obliga a pagar y tratar mejor. Ciertamente, en el mundo de la economía los intereses de clase contribuyen a explicar buena

parte de las reivindicaciones y medidas de política económica. Pero fuera de ello, la aproximación a este tema no ha sido tan común. Otras inquietudes en el mundo académico parecen haber dominado al tema laboral y sus extensiones y derivaciones.

Nos parece que, en general, el desapego por los análisis de clase socio-económica, la consecuente ausencia de análisis empíricos puede deberse a que la motivación que originalmente llevó a estudiar las clases se ha debilitado o perdido. Ciertamente, hay consenso en que el enfrentamiento de las clases típicas de la economía capitalista europea no lleva a un cambio radical de sociedad aunque sí sea una manera de obtener logros muy importantes en términos de calidad de vida. Esta progresiva pérdida del interés por las clases puede ser consecuencia de que, a pesar de la lista de problemas de fondo que hemos presentado a manera de preguntas en el párrafo anterior, no parecen ser motivos suficientes para reunir voluntades y organizar movimientos

que permitan integrar el trabajo intelectual a procesos de cambio social. Quizá se trata de que son motivos diversos aquellos que congregan grupos aparte y en poco diálogo entre sí. La complejidad de las cosas daría lugar a una dispersión de intereses. Parece dominar la impresión de que para lograr esos diversos objetivos, las clases sociales de la economía no son los agentes que conduzcan a alcanzarlos.

Quizá, las clases que habían o se estaban formando se han disuelto como indica Josefina Huamán (395) al tratar de los cambios sociales en Lima Norte. Puede haber sucedido que otras reivindicaciones, como las de género, han sido vistas con más potencial transformador de la sociedad y poco articulables a reivindicaciones de clase. También parece ser necesario ver las clases internacionalmente y que, al hacerlo, si la preocupación es movilizarlas, el intento adquiere dimensiones globales más difíciles de administrar. De hecho, las relaciones internacionales están prácticamente ausentes en el libro.

La dimensión espacial se encuentra presente al ubicar geográficamente varios de los estudios, pero es el de Pablo Vega Centeno sobre Lima el que desarrolla la expresión espacial de las desigualdades sociales (341). También están poco tratados los procesos de estructuración ocupacional. Sandra Vallenás (349) recuerda que los autores contemporáneos en el campo de las clases sociales se concentran en los resultados dejando de lado, por ejemplo, el efecto estructurante de dichas clases que tienen las relaciones de género. Ciertamente, en una época en que está de moda la competitividad no hay análisis del proceso de la competencia económica en los mercados y su efecto en la constitución y dinamismo de las clases socio-económicas.

El trabajo de Guillermo Rochabrún tampoco explicita en un inicio la finalidad de su exploración del bagaje intelectual peruano. Al final indica que la suya es entender y resolver un dualismo que se presenta en las relaciones interpersonales y en forma de “escisiones macrosociológicas” (118). En cierto sentido, volvemos a la desigualdad como preocupación fundante, pero no es claro tampoco cual desigualdad, la desigualdad de qué, es la motivadora de las pesquisas en el pensamiento nacional. ¿Qué desigualdad podría ser? Intuimos que la más presente es la que proviene de la herencia colonial. Benavides la asocia a la rigidez, a la asociación entre clase y raza, en contraste con la narrativa del protagonismo popular emergente (129). Tenemos la impresión que esa herencia impulsa estudios que tienen un importante carácter introspectivo; una aproximación psicológica a lo social. Pero ese no es el tema del libro a pesar de que sí hay una parte del texto sobre la dimensión cultural.

En un reconocimiento de la necesidad de observar con menos categorías predeterminadas Rochabrún prefiere tratar de “divisiones sociales” a la vez que su perspectiva parte desde el extremo opuesto que Plaza, aunque siempre desde el análisis del pensamiento social. Si este analiza el pensamiento en y sobre las sociedades capitalistas avanzadas, aquel lo hace en y

sobre la sociedad en el Perú. En el recorrido se propone una correspondencia entre los momentos de la realidad peruana y el tipo de enfoque, estamento (racial), de clases, de estratos según diversos criterios, de nuevo de clase, de nuevo de estratos (consumo). El pensamiento peruano correspondería, por lo menos en cierta medida, con la realidad que vivieron los pensadores y sería en consecuencia bastante autónomo de las posibles influencias externas (117-118).

Se deja ver en el texto una distinción economía-política que nos parece interesante y que se encuentra presente en la actualidad. Están quienes entran al análisis de la política desde la economía y quienes necesitan menos de ésta para estudiar aquella, pudiendo incluso explicarla. La economía es, a menudo, vista desde su composición estructural entendida en términos sectoriales, de intensidad de capital, de empleo y no tanto de relaciones sociales. Autoras como Rosemary Thorp han recorrido el siglo XX con un planteamiento convergente a ese en cuanto a la importancia del tipo tecnológico de actividad en la conformación de la sociedad peruana.

Una pregunta que recorre el libro es sobre la existencia de las clases tradicionales de las sociedades que analizaron los clásicos en el tema. Tomando una hipótesis de Guillermo Nugent, Benavides ofrece un análisis de movilidad social ocupacional con el fin de detectar la existencia de clases sociales entendidas como grupos ocupacionales estables. Nos parece que la idea es también que si son estables su carácter como clase se hace más densa, con más dimensiones que la económica. El autor muestra que hay estabilidad en la parte superior e inferior de la estructura social pero que en un anchísimo medio hay gran movilidad interna ascendente, horizontal y descendente.

Para Fanni Muñoz y Mauricio Flores, en las provincias, particularmente en Huancavelica, no habrían propiamente clases por la gran proporción de trabajadores independientes y trabajadores familiares no remunerados. (235) Pero el tenor general del libro no se centra en afirmar que no hay clases sino en

insistir en que son distintas a las europeas, en que otros factores de división social, estamentales, raciales, y otros, son muy importantes. Esa imagen social del Perú pretende recoger diversas fuentes de clasificación y división, desde las de origen colonial hasta las que resultan del acceso a Internet. Hacia el medio, un razonamiento común es que las clases y la estratificación ocupacional resultan de cambios exógenos en la estructura productiva que, a su vez, tiene relación con cambios en la división internacional del trabajo o en olas, pendularmente, de intervención estatal y de políticas más o menos industrializantes y centralistas. Para varios autores y autoras, un “modelo de desarrollo” no explicado en sí mismo estaría a la base de las variaciones en la configuración de las clases socio-económicas.

En general, el libro es un buen texto de enseñanza en la medida en que varios de los ensayos pueden ser vistos como materiales de clase sin dejar de ser investigaciones y otros trabajos son empíricos basados en casos de escala subnacional y también valiosos en su aporte. ■■

* Ph. D. en Economía por The New School for Social Research, Estados Unidos. Actualmente profesor principal del departamento de economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú.